

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS
AMERICANOS Y LOS DERECHOS
HUMANOS
1960-1967

THE ORGANIZATION OF AMERICAN
STATES AND HUMAN RIGHTS
1960-1967

**General Secretariat
Organization of American States
Washington, D.C.
1972**

TABLA DE MATERIAS

Página

INTRODUCCION	vi
PRIMERA PARTE	
LABOR DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS	
CAPITULO I. Las Conferencias Interamericanas y las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores	2
CAPITULO II. El Consejo de la Organización de los Estados Americanos	16
A. Establecimiento y organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	16
1. Estatuto de la Comisión	16
2. Elección de los Miembros de la Comisión	18
B. Proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos	20
1. Antecedentes del Proyecto de Convención	20
2. Mandato de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria	22
3. Examen del Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos	24
4. Estudio del Dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	26
5. Consulta a los Gobiernos de los Estados miembros	28
CAPITULO III. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos	32
A. Establecimiento y organización	32
B. Secretaría de la Comisión	34
C. Competencia	36
D. Actividades	38
1. Examen de la situación de los derechos humanos en los países americanos	38
2. Consideración de las comunicaciones o reclamaciones	52
3. Proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos	54
4. Otras actividades encaminadas a promover el respeto de los derechos humanos	58
5. Ampliación de las facultades de la Comisión	62
CAPITULO IV. Otros organismos que actúan en el campo de los derechos humanos	68
A. La Comisión Interamericana de Mujeres	68
1. Los derechos de la mujer en las conferencias interamericanas e internacionales	68
2. Otros medios para promover los derechos de la mujer	70
B. El Instituto Interamericano del Niño	80

TABLE OF CONTENTS

Page

INTRODUCTION	vii
PART I	
WORK OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES	
CHAPTER I. The Inter-American Conferences and the Meetings of Consultation of Ministers of Foreign Affairs	3
CHAPTER II. The Council of the Organization of American States	17
A. Establishment and Organization of the Inter-American Commission on Human Rights	17
1. Statute of the Commission	17
2. Election of the Members of the Commission	19
B. Draft Inter-American Convention on Human Rights	21
1. Background of the Draft Convention	21
2. Request of the Second Special Inter-American Conference	23
3. Examination of the Draft Inter-American Convention on Human Rights prepared by the Inter-American Council of Jurists	25
4. Study of the Opinion of the Inter-American Commission on Human Rights	27
5. Consultation with the Governments of the Member states	29
CHAPTER III. The Inter-American Commission on Human Rights	33
A. Establishment and Organization	33
B. Secretariat of the Commission	35
C. Competence	37
D. Activities	39
1. Examination of the situation of human rights in American countries	39
2. Consideration of Communications or Claims	53
3. Draft Inter-American Convention on Human Rights	55
4. Other activities directed toward promoting respect for human rights	59
5. Strengthening the Powers of the Commission	63
CHAPTER IV. Other Groups Active in the Field of Human Rights	69
A. The Inter-American Commission of Women.....	69
1. Women's Rights in the Inter-American and International Conferences	69
2. Other means for advancing the human rights of women	71
B. The Inter-American Children's Institute	79

SEGUNDA PARTE

ESTUDIOS

	Página
<i>La Paz y Los Derechos Humanos</i> . Manuel Bianchi	84
<i>Los Derechos Humanos al alcance de los niños</i> . Angela Acuña de Chacón	95
<i>La libertad de expresión, información e investigación</i> . Gonzalo Escudero	110
<i>La Protección de los derechos humanos frente a la suspensión de las garantías constitucionales o "Estado de Sitio"</i> . Daniel H. Martins	122
<i>Relación entre el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la democracia representativa</i> . (Resumen en español). Durward V. Sandifer	195

TERCERA PARTE

INFORMES

Informe sobre la situación de los presos políticos y sus familiares en Cuba	202
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití	290
Informe sobre la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la República Dominicana (1° de junio al 31 de agosto de 1965)	358
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su actuación en la República Dominicana (1° de septiembre de 1965 a 6 de julio de 1966)	438
La situación de los refugiados políticos en América. Informe preparado por la Secretaría	476

CUARTA PARTE

DOCUMENTOS

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	560
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales	572
Declaración de Santiago de Chile	586
Resoluciones relativas a los derechos humanos, aprobadas por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria	590
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	600
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	610
Estatuto Orgánico de la Comisión Interamericana de Mujeres	626
Proyecto de Convención Interamericana sobre libertad de expresión, de información y de investigación	634

QUINTA PARTE

Bibliografía	643
Índice	651

PART II

STUDIES

	Page
<i>Peace and Human Rights</i> . (Summary in English). Manuel Bianchi	92
<i>Human Rights at the Level of School Children</i> . (Summary in English). Angela Acuña de Chacón	107
<i>Freedom of Expression, Information and of Investigation</i> . (Summary in English). Gonzalo Escudero	119
<i>Protection of Human Rights in Connection with the Suspension of Constitutional Guarantees or "State of Siege"</i> (Summary in English). Daniel H. Martins	152
<i>The Relationship Between the Respect for Human Rights and the Effective Exercise of Representative Democracy</i> . Durward V. Sandifer	155

PART III

REPORTS

Report on the Situation of Political Prisoners and their Relatives in Cuba	203
Report on the Situation Regarding Human Rights in Haiti	291
Report on the Activities of the Inter-American Commission on Human Rights in the Dominican Republic (June 1 to August 31, 1965)	359
Report on the Inter-American Commission on Human Rights on its Activities in the Dominican Republic (September 1, 1965 to July 6, 1966)	439
Report on the Political Refugees in America. Report prepared by the Secretariat	477

PART IV

DOCUMENTS

American Declaration on the Rights and Duties of Man	561
Inter-American Charter of Social Guarantees	573
The Declaration of Santiago, Chile	587
Resolutions Regarding Human Rights Approved by the Second Special Inter-American Conference	591
Statute of the Inter-American Commission on Human Rights	601
Regulations of the Inter-American Commission on Human Rights	611
Organic Statute of the Inter-American Commission of Women	627
Draft Inter-American Convention on Freedom of Expression, Information and Investigation	635

PART V

Bibliography	643
Index	652

INTRODUCCION

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el año 1968 como "Año Internacional de los Derechos Humanos", con el fin de conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en París el 10 de diciembre de 1948.

Los Estados Americanos, en la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro, en 1965, resolvieron asociarse a la celebración del Año Internacional y contribuir, por todos los medios a su alcance, a darle mayor efectividad y lucimiento. Al hacerlo así, la Organización dispuso conmemorar, al mismo tiempo, el vigésimo aniversario de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, firmada en Bogotá el 2 de mayo de 1948.

Con este propósito la citada Conferencia solicitó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un programa de actividades, que destacara el aporte realizado por los Estados americanos para consagrar la protección internacional de los derechos humanos y la conveniencia de promover la enseñanza y la difusión de esos derechos entre los pueblos americanos.

En el programa de actividades elaborado por la Comisión, se contempla la publicación de un Anuario de Derechos Humanos, que a partir de 1968 refleje el progreso anual de la Organización en este campo. Para iniciar esta publicación se acordó la preparación de un volumen compilativo de la obra realizada por el organismo regional americano, desde el establecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el Año Internacional, bajo el título siguiente: La Organización de los Estados Americanos y los Derechos Humanos—Actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1960-1967.

En consecuencia, el presente volumen es el resumen de la obra realizada en estos siete años y su contenido refleja no sólo el esfuerzo intelectual y técnico de los organismos encargados de impulsar la causa de los derechos humanos, sino que presenta una relación de las actividades específicas llevadas a cabo en diversos países americanos dentro de ese campo.

La Primera Parte de este volumen comprende una relación general de la labor de la Organización en el ámbito de los derechos humanos que incluye los trabajos iniciales relacionados con el Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos. La Segunda Parte contiene varios estudios sobre importantes aspectos en este campo y la Tercera Parte algunos de los informes preparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la situación de esos derechos en países americanos.

La Cuarta Parte reúne los documentos básicos de la Organización de los Estados Americanos en lo que se refiere a derechos humanos. Finalmente, en la Quinta Parte aparece una bibliografía selecta sobre la materia, correspondiente a 1960-1967.

La Secretaría General de la Organización abraza la esperanza de que este volumen, que es una fuente de carácter histórico y técnico, será de mucha utilidad para las personas que se interesan en el tema de los derechos humanos. Es de esperar que el mismo sirva no solamente para proporcionar información sobre lo que se ha hecho en defensa de la dignidad del hombre durante una importante etapa del Sistema Interamericano, sino para estimular en los pueblos de América la conciencia y el interés en torno a la vigencia efectiva de tales derechos.

Galo Plaza
Secretario General

INTRODUCTION

The General Assembly of the United Nations designated 1968 as "International Year for Human Rights" to commemorate the twentieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights proclaimed in Paris on December 10, 1948.

At the Second Special Inter-American Conference, held in Rio de Janeiro in 1965, the American states resolved to join in the celebration of the "International Year for Human Rights" and to contribute, by all of the means at their disposal, to make it more effective and more successful. In doing so, the Organization decided to commemorate, at the same time, the twentieth anniversary of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, signed in Bogota on May 2, 1948.

To this end, the Conference requested the Inter-American Commission on Human Rights to prepare a program of activities that would stress the contribution made by the American states in establishing international protection of human rights and the advisability of promoting the teaching and dissemination of these rights among the peoples of the Americas.

The program of activities prepared by the Commission called for the publication, starting in 1968, of a Human Rights Yearbook to reflect the progress made by the Organization in this field each year. It was decided that the first volume would encompass all the work done by the American regional agency from the establishment of the Inter-American Commission on Human Rights until the International Year, and would bear the title The Organization of American States and Human Rights—Work of the Inter-American Commission on Human Rights 1960-1967.

Accordingly, this volume summarizes the activities carried out during those seven years, and its contents not only reflect the intellectual and technical efforts of the agencies charged with promoting the cause of human rights, but also present a report on specific activities carried out in several American countries in this field.

Part One of this volume is a general report on the work of the Organization in the field of human rights, including the first work done in connection with the Draft Inter-American Convention on the Protection of Human Rights. Part Two contains several studies on important aspects of this field, and Part Three includes some of the reports prepared by the Inter-American Commission on Human Rights with respect to the situation regarding human rights in the American countries.

Part Four assembles the basic documents of the Organization of American States pertaining to the subject of human rights. Finally, Part Five contains a select bibliography on the subject for the period 1960-1967.

The General Secretariat hopes that this volume, a historical and technical source book, will prove very useful to persons interested in human rights, and that it will not only supply information on what has been done in behalf of human dignity during an important stage of the inter-American system, but also arouse awareness in the peoples of America of these rights, and their interest in seeing that they are made truly effective.

Galo Plaza
Secretary General

PARTE I

LABOR DE LA ORGANIZACION
DE LOS ESTADOS AMERICANOS

PART I

WORK OF THE ORGANIZATION
OF AMERICAN STATES

CAPITULO I

LAS CONFERENCIAS INTERAMERICANAS Y LAS REUNIONES DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES

La labor de la Organización de los Estados Americanos en el campo de los derechos humanos ha sido realizada a través de un largo proceso, cuyos orígenes datan de la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1889-1890.

Si bien el presente volumen trata exclusivamente del período comprendido entre 1960 y 1967, es oportuno hacer referencia a la obra llevada a cabo con anterioridad a 1960, es decir, antes de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de velar por la observancia y promoción de esos derechos en los Estados miembros de la Organización.

En el período de cincuenta y ocho años transcurridos entre la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas (Washington, 1890) y la aprobación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Bogotá, 1948), se celebraron nueve conferencias internacionales americanas—además de tres Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y varias conferencias y reuniones de organismos interamericanos—en las que se trataron diversos temas relacionados con la protección de los derechos humanos.

Las resoluciones y recomendaciones que sobre esta materia se aprobaron en esas reuniones revelan, de parte de los Estados americanos, una creciente preocupación por la observancia de los derechos del hombre en todo el ámbito continental.

Aún antes de firmarse la Carta de Bogotá en 1948, ya los países americanos habían dado dos pasos de importancia al suscribir la Convención de Asilo de la Habana (1928) y la Convención de Asilo Político de Montevideo (1933), instrumentos que plasmaron en realidad la protección jurídica internacional de un importante derecho de la persona humana, el cual contaba con una arraigada tradición americana.

En 1945 tuvo lugar en Chapultepec, México, la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz. En esta reunión se echaron los fundamentos de la actual Organización de los Estados Americanos—siendo por consiguiente el preámbulo de la Novena Conferencia de Bogotá, celebrada tres años después y se fijaron las bases conforme a las cuales se ha venido desarrollando la protección de los derechos humanos.

En este sentido, la Resolución XL de dicha Conferencia no sólo proclamó la adhesión de las Repúblicas Americanas a los principios consagrados en el Derecho Internacional para la salvaguardia de los derechos humanos, sino que se encomendó al Comité Jurídico Interamericano la redacción de un anteproyecto de Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, y al Consejo Directivo de la Unión Panamericana que convocara a una Conferencia de Jurisconsultos americanos, a fin de adoptar la proyectada declaración en forma convencional por parte de los Estados del Continente.

Al arribar a la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948), los Estados americanos daban término a la etapa inicial del Sistema Interamericano,

CHAPTER I

THE INTER-AMERICAN CONFERENCES AND THE MEETINGS OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN RELATIONS

The work of the Organization of American States in the field of human rights has continued through a lengthy evolution the origins of which date from the First International Conference of American States, held in 1889-1890.

While the present volume devotes itself exclusively to the period between 1960 and 1967, it is in order to make some reference to the achievements of the period before 1960, i.e., prior to the creation of the Inter-American Commission on Human Rights, which is assigned to keep vigilance over the observance and promotion of these rights among the member states of the Organization.

During the period of fifty-eight years between the establishment of the International Union of American Republics (Washington, D.C., 1890) and the signing of the Charter of the Organization of American States (Bogotá, 1948), nine international conferences of American States were held—besides three Meetings of Consultation of Ministers of Foreign Affairs and a number of conferences and meetings of inter-American agencies—in which were taken up different topics related to the protection of human rights.

The resolutions and recommendations in this area that were approved during these meetings demonstrate a growing concern on the part of the American States for the observance of human rights throughout the Continent.

Even before the Charter of Bogotá was signed in 1948, the American nations had already taken two important steps in signing the Convention on Asylum of Havana (1928) and the Convention on Political Asylum of Montevideo (1933), instruments that brought into reality international legal protection for an important right of the individual, and one that was deeply rooted in the traditions of America.

In 1945, the Inter-American Conference on Problems of War and Peace took place in Chapultepec, México. At this meeting were laid the foundations of the present Organization of American States rendering the preamble to the Ninth Conference at Bogotá held three years later—and the principles were determined on which the protection of human rights has developed.

Along these lines, Resolution XL of this Conference not only proclaimed the adherence of the American republics to the principles established in international law for safeguarding the essential rights of man; but also, the Inter-American Juridical Committee was assigned the preparation of a preliminary draft declaration of the international rights and duties of man, and the Governing Board of the Pan American Union was requested to convene an International Conference of American Jurists, in order to adopt the draft declaration as a convention on the part of the nations of the Continent.

With the Ninth International Conference of American States (Bogotá, 1948) the States of America brought to an end the initial stage of the Inter-American System, and through a series of actions changed and strengthened the system, converting it into an

y mediante una serie de disposiciones transformaron y fortalecieron dicho sistema, convirtiéndolo en una institución jurídica eficaz, basado en un pacto contractual de obligatorio cumplimiento, integrado por las veintiuna repúblicas americanas entonces existentes.

El tema de los derechos humanos fue de máxima importancia en esta conferencia, a juzgar por el contenido de sus principales resoluciones.

A partir de la Novena Conferencia el Sistema dispuso de instrumentos que le permitieron realizar eficazmente su misión, tales como la Carta de la Organización, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta Interamericana de Garantías Sociales y las convenciones sobre concesión de derechos políticos y civiles a la mujer, las cuales significaron un importante progreso para los referidos derechos.

Desde 1948 se ha acelerado la acción de la OEA en este campo, siendo un paso importante la aprobación de dos convenciones para perfeccionar el referido derecho de asilo en el Continente, a saber, la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo Territorial (Décima Conferencia Interamericana, Caracas, 1954).

Una de las resoluciones más importantes de la Décima Conferencia fue la Resolución XXVII, "Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos". Esta resolución resumió todas las medidas adoptadas por los Estados miembros de la Organización para la promoción de los derechos humanos, declarando luego que el fortalecimiento y ejercicio efectivo de la democracia exigen medidas que aseguren el cabal funcionamiento de las instituciones democráticas, entre las cuales adquieren relieve importante los sistemas de protección de los derechos y las libertades del ser humano mediante la acción internacional o colectiva. La Conferencia declaró el deseo constante de los Estados Americanos de alcanzar la vigencia plena de los derechos y deberes humanos fundamentales, que sólo puede lograrse dentro de un régimen de democracia representativa, y resolvió en favor de seis puntos: el primero, reiterar la inquebrantable adhesión de los Estados americanos respecto de los derechos humanos proclamados en la Declaración Americana y en la Declaración Universal y que, de acuerdo con sus preceptos constitucionales, tomen las medidas apropiadas para asegurar la fiel observancia de esos derechos. Los otros cuatro puntos contenidos en esta parte de la resolución abarcan recomendaciones cuya finalidad es promover la difusión más amplia posible de los derechos humanos en toda la América, encargar a la Unión Panamericana que facilite el intercambio de información sobre derechos humanos entre los países, que emprenda estudios de derecho comparado relativos a la observancia de los derechos humanos en las leyes de los Estados americanos, y que proceda también por su parte a una difusión internacional de los derechos y deberes humanos.

En su Resolución XXIX, intitulada "Corte Interamericana para Proteger los Derechos Humanos", la Conferencia volvió a considerar la propuesta que había sido presentada hacía seis años en la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos. La Novena Conferencia había encargado al Comité Jurídico Interamericano que elaborara un proyecto de estatuto para la creación y funcionamiento de una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre, a fin de que pudiese ser sometido al examen y a las observaciones de los Gobiernos. Compenetrada de la gran importancia de esta cuestión y de la necesidad de que se realizaran más estudios antes de que se pudiera llegar a una decisión, la Conferencia resolvió que el Consejo de la Organización continuara su examen de los aspectos jurisdiccionales de la protección internacional a los derechos humanos, considerando las propuestas y los estudios ya existentes así como su propia experiencia, con el objeto de analizar las posibilidades de crear una Corte Interamericana para Proteger los Derechos del

effective legal institution, based on a legally binding contractual agreement, composed of the twenty-one American republics existing at the time.

As is indicated by its principal resolutions, the subject of human rights was of great importance to this conference.

Beginning with the Ninth Conference the Inter-American System created instruments permitting it to carry out its mission effectively, such as the Charter of the Organization, the American Declaration of the Rights and Duties of Man, the Inter-American Charter of Social Guarantees, and the conventions on the granting of political and civil rights to women, which were an important mark of progress for the equal enjoyment of these rights.

Since 1948, the activity of the OAS in this field has accelerated, an important step being the passage of two conventions to perfect the state of the right of asylum on the Continent, that is, the Convention on Diplomatic Asylum and the Convention on Territorial Asylum (Tenth Inter-American Conference, 1954).

One of the most important resolutions of the Tenth Conference was Resolution XXVII, "Strengthening of the System for the Protection of Human Rights." This resolution summarized all the steps taken by the member states of the Organization for the promotion of human rights and declared that the strengthening of democracy and its effective exercise required measures to ensure the full operation of democratic institutions, among them being systems for the protection of the rights and freedoms of man through international or collective action. The Conference made a declaration of the continuing desire of the American States to attain the full validity of the fundamental human rights and duties, which could be achieved only under a system of representative democracy, and determined six points of approach: first, to reiterate the unswerving adherence of the American States to the human rights proclaimed in the American and Universal Declarations, and to recommend that they take appropriate measures to ensure the faithful observance of the rights asserted in them, so far as they might within the limits of their separate constitutional requirements. The remaining four points of this part of the resolution covered recommendations aimed at promoting the widest possible knowledge of human rights throughout the Americas and at instructing the Pan American Union to facilitate the exchange of human rights information among the member States, to undertake studies in comparative law concerning the state of observance of human rights in the laws of the American states and to contribute through its own resources to the spread of international knowledge of human rights and duties.

In Resolution XXIX, entitled "Inter-American Court for the Protection of Human Rights," the Conference once again took up consideration of the proposal that had been advanced six years before at the Ninth International Conference of American States. The Ninth Conference had requested the Inter-American Juridical Committee to prepare a draft statute providing for the creation and functioning of an Inter-American Court to guarantee the rights of man, so that it might be submitted to the governments for their advice and comments. Appreciating the high importance of this matter and the need for more study before a decision could be reached, the Conference decided that the Council of the Organization should continue its studies of the jurisdictional aspects of international protection of human rights, considering existing proposals, studies and its own experience, in order to analyze the possibility of the creation of an Inter-American Court for the Protection of Human Rights. Following this sustained program of studies and analysis, the matter was to be considered again at the Eleventh Inter-American Conference.

In another resolution, the Conference hailed the efforts thus far made to extend the scope of the right to vote and to participate in the government. In Resolution XXX on

Hombre. Después de llevarse a cabo ese proceso de estudios y análisis, la cuestión sería considerada nuevamente en la Undécima Conferencia Interamericana.

En otra resolución, la Conferencia de Caracas reconoció los esfuerzos encaminados a ampliar el ámbito del derecho al voto y del derecho de participar en el gobierno. En la Resolución XXX sobre "Sufragio Universal", la Conferencia advirtió que, por medio de sus leyes, algunos de los países de América habían extendido en cierto grado el derecho de sufragio a las personas analfabetas y habían adoptado medidas para abolir otras formas de discriminación basadas en condiciones de cultura, sexo, raza, situación económica o credo, y resolvió rendir el homenaje debido a esos países por sus empeños en robustecer las instituciones de la democracia representativa.

En la Resolución XCIV sobre "Discriminación Racial" se examinó otra forma de desigualdad que afecta al libre goce de los derechos humanos. Dicha resolución señaló el peligro para la seguridad y la solidaridad que representan las prácticas discriminatorias y el hecho de que esas prácticas son contrarias a lo declarado y estipulado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como también en la Declaración Universal y en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Por lo tanto, la Conferencia recomendó a los Estados miembros que adoptaran o fortalecieran, según el caso, las medidas legales y educativas para hacer efectiva la supresión de las prácticas de discriminación racial y cumplir el concepto americano de los derechos del hombre.

Una de las últimas resoluciones de la Décima Conferencia Interamericana lleva por título la "Declaración de Caracas", y en ella se hizo una síntesis de la determinación por parte de la Conferencia de aunar los esfuerzos de todos los Estados americanos por aplicar, desarrollar y perfeccionar los principios normativos de las repúblicas americanas, para que formaran la base de una acción firme y solidaria encaminada a lograr dentro de un plazo breve la realización efectiva del sistema democrático representativo, el imperio de la justicia y seguridad sociales y la cooperación económica y cultural esenciales para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente.

Esa resolución también reafirmó los principios y finalidades fundamentales de la Carta de la Organización, de las dos Declaraciones Internacionales de derechos humanos y de otras disposiciones afines aprobadas por la Organización; reiteró el reconocimiento del derecho inalienable de cada Estado americano de escoger libremente sus propias instituciones y la forma de vida política y evolución cultural propias, y renovó "la convicción de los Estados americanos de que uno de los medios más eficaces para robustecer sus instituciones democráticas consiste en fortalecer el respeto a los derechos individuales y sociales del hombre, sin discriminación alguna, y en mantener y estimular una efectiva política de bienestar económico y justicia social destinada a elevar el nivel de vida de los pueblos . . ."

Asimismo la Organización de los Estados Americanos promovió la causa de los derechos humanos a través de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, originalmente convocadas con el objeto de coordinar la actitud de los Gobiernos americanos ante la situación creada por la Segunda Guerra Mundial.

En algunas de estas Reuniones de Consulta, como la Cuarta Reunión (Washington, 1951) se tomaron acuerdos definitivamente orientados a la defensa y protección de los derechos humanos. En este sentido debe citarse que en la Resolución VII aprobada en la misma, la cual lleva como título "Fortalecimiento y Ejercicio Efectivo de la Democracia", después de declarar que la solidaridad de las repúblicas americanas requiere el ejercicio efectivo de la democracia representativa, la justicia social y el respeto y la vigencia de los derechos y deberes del hombre, la Reunión instó a los

Universal Suffrage, the Conference observed that some of the American countries, through legislative advances, had made an appreciable extension of the right of suffrage to illiterates and had adopted reforms to abolish other discriminations based on cultural conditions, sex, race, economic status or creed, and resolved to pay due tribute to those countries for their efforts to broaden and strengthen the institutions of representative democracy.

Another form of inequality affecting the free enjoyment of human rights was discussed in Resolution XCIV on Racial Discrimination. This resolution noted the danger to security and solidarity posed by discriminatory practices and the contrariety of such discrimination to the substance of the Charters of the United Nations and the Organization of American States, as well as to that of the Universal and American Declarations of Human Rights. Accordingly, the Conference recommended to the member states that they adopt or strengthen, as the case may be, legal and educational measures to make effective the abolition of racial discrimination and fulfill the American concept of the rights of man.

One of the final resolutions of the Tenth Inter-American Conference was called the Declaration of Caracas, which synthesized the determination of the Conference to unite the efforts of all the American States to apply, develop, and perfect the guiding principles of the Americas, so that they might form the basis of firm and consolidated action designed to attain within a short time the effective realization of the representative democratic system, the rule of social justice and security, and the economic and cultural cooperation essential to the mutual well-being and prosperity of the peoples of the continent.

This resolution also reaffirmed the guiding principles of the great international charters and of the Declaration of Human Rights, reiterated the Conference's recognition of the inalienable right of each of the American States to independence in the choice of its institutions or the style of its political life and cultural development, and renewed "the conviction of the American States that one of the most effective means of strengthening their democratic institutions is to increase respect for the individual and social rights of man, without any discrimination, and to maintain and promote an effective policy of economic well-being and social justice to raise the standard of living of their peoples. . . ."

The Organization of American States has likewise advanced the cause of human rights through the Meetings of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, originally convened for the purpose of coordinating the response of the Governments of the Americas to the situation created by the Second World War.

At certain of these Meetings of Consultation, such as the Fourth (Washington, 1951), decisions were taken that were purposefully directed toward the defense and protection of human rights. Along these lines, it should be noted that in Resolution VII of this Meeting, entitled "The Strengthening and Effective Exercise of Democracy," after declaring that the solidarity of the American republics requires the effective exercise of representative democracy, social justice, and respect for and observance of the rights and duties of man, the Meeting urged the governments of America, pending the adoption and entry into force of proposed international measures for the protection of human rights, to maintain and apply the precepts of the American Declaration of the Rights and Duties of Man and of the Resolution on the Preservation and Defense of Democracy in America approved by the Ninth Conference, so far as may accord with the constitutions of those governments.

In its Resolution IX, on the Improvement of the Social, Economic and Cultural Levels of the Peoples of the Americas, the Meeting recommended to the American

gobiernos de América para que, en tanto no se adoptasen y entraran en vigor las medidas de carácter internacional propuestas para proteger los derechos humanos, mantuvieran y aplicaran, conforme a sus procedimientos constitucionales, los preceptos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Resolución sobre Preservación y Defensa de la Democracia en América aprobadas en la Novena Conferencia.

En su Resolución IX sobre el Mejoramiento del Nivel Social, Económico y Cultural de las Poblaciones de América, la Reunión recomendó a los gobiernos de las repúblicas americanas que, para el robustecimiento de su seguridad interna y su estabilidad, atendiesen con el empeño debido la magna empresa de elevar el nivel social, económico y cultural de sus pueblos, cuidando que en el mayor grado posible satisfagan los derechos consagrados a ese respecto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales.

En 1959, con motivo de una serie de acontecimientos que pusieron en peligro la paz en la región del Caribe, los Gobiernos miembros de la Organización decidieron convocar la Quinta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. El 30 de julio de ese año el Consejo de la Organización aprobó el programa de la reunión, la cual se consagró a tratar dos temas principales: consideración de la tensión internacional en el área del Caribe y ejercicio efectivo de la democracia representativa, así como el respeto a los derechos humanos.

La Reunión tuvo lugar en Santiago de Chile del 12 al 18 de agosto de 1959, aprobando varias resoluciones de suma importancia para el desarrollo de la protección internacional de los derechos humanos.

El Acta Final de la Reunión se inició con la "Declaración de Santiago", en la cual los Ministros de Relaciones Exteriores proclamaron los ocho principios que deben regir la vida humana en el hemisferio americano, dentro de un sistema democrático, con el fin de permitir que la opinión pública, tanto nacional como internacional, decida por sí misma en qué medida los regímenes políticos y los Gobiernos se conforman al sistema democrático. Los puntos sostenidos por la Declaración fueron, en resumen, los siguientes: el imperio de la ley debe asegurarse mediante la independencia de los poderes y la facultad del poder judicial para fiscalizar los actos del Gobierno; el Gobierno debe surgir de elecciones libres; la perpetuación de un Gobierno en el poder no es compatible con el ejercicio efectivo de la democracia; los gobiernos americanos deben mantener un régimen de libertad individual y justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana; los derechos humanos reincorporados en las legislaciones de los Estados americanos deben ser protegidos por medios judiciales eficaces; el uso sistemático de la proscripción política es contrario al orden democrático americano; la libertad de información y expresión son condiciones esenciales para la existencia de un régimen democrático; y por último, que los Estados americanos deben cooperar entre sí para fortalecer sus instituciones democráticas y conseguir condiciones de vida justas y humanas para sus pueblos.

Otra resolución confió al Consejo Interamericano de Jurisconsultos el estudio de la relación jurídica entre el respeto a los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la democracia representativa, así como la facultad de poner en marcha los mecanismos disponibles del derecho internacional americano.

Abundando más en el tema del ejercicio efectivo de la democracia representativa, la reunión de Consulta, refiriéndose al Artículo 5 (d) de la Carta de la Organización, se dirigió al Consejo de la Organización y solicitó del mismo la preparación de un

Republics that for the sake of strengthening internal security and stability they undertake to raise the social, economic, and cultural levels of their own people, while so far as possible satisfying the rights of this sort recognized by the American Declaration of the Rights and Duties of Man, the Universal Declaration of Human Rights and the Inter-American Charter of Social Guarantees.

In 1959, because of a series of events that endangered peace in the Caribbean region, the member governments of the Organization decided to convene the Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs. On July 30, 1959, the Council approved the program for the Meeting, which was to devote itself to two main topics: consideration of the situation of international tension in the Caribbean region, and the effective exercise of representative democracy, as well as respect for human rights.

The Meeting took place at Santiago, Chile, from August 12 to 18, 1959, and approved several resolutions of great importance to the development of international protection of human rights.

The Final Act of the Meeting opened with the Declaration of Santiago, Chile, in which the assembled Ministers brought forward eight points of principle to guide life under the system of democracy in the American hemisphere, for the purpose of allowing both national and international public opinion to decide for itself the degree to which political regimes and governments conformed to the democratic system. The points made by the Declaration were, in brief, that: the rule of law must be secured by separation of powers and judicial review of acts of government; government must arise from free elections; the perpetuation in power of a government is not compatible with the effective exercise of democracy; the American governments should support a system of individual liberty and social justice based on respect for the fundamental rights of man; human rights recognized in the laws of American nations must be protected by effective judicial means; the systematic use of political ostracism is contrary to American democratic order; freedom of information and expression are essential conditions for the survival of a democratic system; and that the American nations must work together to strengthen their democratic institutions and to secure just and humane conditions for the life of their peoples.

Another resolution entrusted to the Inter-American Council of Jurists a study of the juridical relationship between respect for human rights and the effective exercise of representative democracy, and also a study of the power to put into operation the availing mechanisms of American international law.

Further on the subject of the effective exercise of representative democracy, the Meeting of Consultation, referring to Article 5(d) of the Charter of the Organization, addressed itself to the Council of the Organization requesting a draft Convention on the effective exercise of representative democracy which would set up procedures and remedies to be applied.

In its recitals, Resolution VIII entitled "Human Rights" summarizes the preambles of the Charter of the Organization of American States and of the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, with references to provisions of other inter-American instruments, all expressing a definite and continuing consensus in favor of international protection for human rights. Accordingly, the Fifth Meeting of Consultation declared that following the progress realized in both the United Nations and the Council of Europe in the codification and study of the field of international juridical protection of human rights, the climate was favorable to the conclusion of a convention. The Meeting then decided first of all that the Inter-American Council of Jurists should prepare a draft Convention on Human Rights. Secondly, it decided to create an Inter-American Com-

proyecto de Convención sobre el ejercicio efectivo de la democracia representativa que estableciera los procedimientos y recursos que podrían aplicarse en la materia.

La Resolución VIII, titulada "Derechos Humanos", recoge en sus considerandos los preámbulos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y las disposiciones de otros instrumentos interamericanos, que expresan una voluntad constante y definida en favor de la protección internacional de los derechos humanos. Después de declarar que, como consecuencia del progreso alcanzado por las Naciones Unidas y por el Consejo de Europa en la esfera de esa protección internacional, existía un ambiente favorable para la celebración de una Convención sobre la materia, la Quinta Reunión de Consulta resolvió, en primer lugar, encomendar al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos. En segundo lugar, dispuso la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaría encargada de promover el respeto de esos derechos, la cual sería organizada por el Consejo de la Organización.

Al aprobarse la anterior Resolución, se disponía la creación de los dos principales instrumentos, de orden jurídico e institucional, orientados hacia la protección eficaz de los derechos de la persona humana dentro de la jurisdicción regional americana. Dicha Resolución representó la culminación de los esfuerzos realizados por la Organización en el ámbito de los derechos humanos y marcó el comienzo de una nueva etapa en el Sistema Interamericano.

Tanto el Consejo de Jurisconsultos como el Consejo de la Organización cumplieron con el mandato allí expresado. El primero formuló un proyecto de Convención de Derechos Humanos en su Cuarta Reunión, celebrada en la propia ciudad de Santiago de Chile en septiembre de 1959 y el Consejo de la Organización, por su parte, estableció el 6 de junio de 1960 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos años más tarde la Octava Reunión de Consulta (Punta del Este, 1962) consideró la conveniencia de fortalecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por estimar que era una necesidad imperiosa "acelerar en el Continente la evolución de la defensa colectiva de los derechos de la persona humana, con el objeto de que dicha evolución culmine en la protección internacional y jurisdiccional de tales derechos".

A este respecto la Resolución IX allí aprobada señalaba en sus considerandos que existía "una evidente relación entre las violaciones de los derechos humanos y las tensiones internacionales que conspiran contra la concordia, la paz y la unidad del hemisferio".

En su parte dispositiva, la citada Resolución agregaba:

"Recomendar al Consejo de la Organización de los Estados Americanos la reforma del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de ampliar y fortalecer sus atribuciones y facultades en el grado que le permita llevar a cabo eficazmente la promoción del respeto a esos derechos en los países continentales".

La recomendación hecha por la Octava Reunión de Consulta, en 1962, fue debidamente atendida por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria que se reunió en Río de Janeiro en 1965. Esta Conferencia, además de recoger las aspiraciones expresadas en el citado acuerdo de Punta del Este, prestó amplia y detenida atención a otros importantes aspectos dentro del campo de los derechos humanos.

En este sentido, la Resolución XXII acordó, específicamente, ampliar las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, autorizando a la misma para que examine las comunicaciones que reciba, para que se dirija a los Gobiernos y recabe

mission on Human Rights, to be organized by the Council of the Organization, and which would be charged with the work of furthering respect for such rights.

The approval of the foregoing resolution provided for the creation of the two chief instruments, respectively legal and institutional in nature, that are directed to the effective protection of the rights of the individual within the regional jurisdiction of the Charter. This resolution represented the culmination of the efforts exerted by the Organization in the sphere of human rights and marked the beginning of a new stage of the Inter-American System.

Both the Council of Jurists and the Council of the Organization complied with the directive given them. The former prepared a draft Convention on Human Rights at its Fourth Meeting held in the same city of Santiago, Chile, in September, 1959; and the Council of the Organization for its own part established the Inter-American Commission on Human Rights on June 6, 1960.

Two years later, the Eighth Meeting of Consultation (Punta del Este, 1962) considered the advisability of strengthening the Inter-American Commission on Human Rights on the ground that there was a pressing need "for accelerating development in the hemisphere of the collective defense of human rights, so that this development may result in international legal protection of these rights."

And along these lines, Resolution IX of this Meeting stated that "There is an obvious relation between violations of human rights and the international tensions that work against the harmony, peace, and unity of the hemisphere."

In its substantive language, the Resolution stated the decision:

To recommend to the Council of the Organization of American States that it revise the statute of the Inter-American Commission on Human Rights, broadening and strengthening the Commission's attributes and faculties to such an extent as to permit it effectively to further respect for these rights in the countries of the hemisphere.

The recommendation of the Eighth Meeting of Consultation in 1962 was duly taken up by the Second Special Inter-American Conference, which met at Rio de Janeiro in 1965. This Conference, besides expressing anew the aspirations of the decision taken at Punta del Este, devoted ample and thorough attention to other important features of the field of human rights.

Accordingly, Resolution XXII specifically broadened the powers of the Inter-American Commission on Human Rights, authorizing the Commission to examine communications submitted to it, to address the Governments and obtain from them information deemed pertinent and to make recommendations on cases to them. This Resolution also provided that the Commission submit an annual report to the Inter-American Conference or to the Meeting of Consultation, stating the progress achieved in the attainment of the goals set forth in the American Declaration, and requested that it give particular attention to certain of the rights asserted in that instrument, besides continuing to keep vigilance over the observance of all the rights contained in the Declaration, in each of the American states.¹

Another important act of this Conference was Resolution XXIII, under which it was decided that the Organization would join in the celebration of International Human Rights Year, proclaimed for 1968 by the General Assembly of the United Nations, and

¹ For a detailed account of these provisions, see the section devoted to the Inter-American Commission on Human Rights.

de éstos las informaciones pertinentes y hacer a los mismos las recomendaciones del caso. Igualmente dispuso dicha Resolución que la Comisión rinda un informe anual a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta, exponiendo el progreso alcanzado en el logro de los objetivos señalados en la Declaración Americana, encomendándole que preste especial atención a determinados derechos consagrados en dicho instrumento, además de continuar velando por la observancia de todos los derechos comprendidos en esa Declaración, en cada uno de los Estados americanos.¹

Otra disposición de importancia tomada en esta Conferencia fue la Resolución XXIII, en virtud de la cual se acordó que la Organización se asociara a la celebración del Año Internacional de los Derechos Humanos, proclamado para 1968 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, encomendándosele a la Comisión de Derechos Humanos la elaboración del programa de actividades para ese fin.

También fue de trascendencia para los derechos humanos la Resolución XXIV, que dispuso encomendar al Consejo de la Organización la tarea de actualizar y completar el Proyecto de Convención sobre Protección de Derechos Humanos, preparado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en 1959, en la realización de cuya tarea debía escuchar previamente el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tomando en consideración, además, los proyectos de Convención presentados a dicha Conferencia por los Gobiernos de Chile y Uruguay.²

La propia Conferencia se ocupó, asimismo, de adelantar el proceso encaminado a la preparación de un texto definitivo de proyecto de Convención sobre Libertad de expresión, de investigación y de información, actualmente en estudio por parte de los Gobiernos miembros de la Organización. En este sentido la Resolución XX solicitó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ampliara el plazo para las observaciones que tengan que hacer los Gobiernos, a los fines de someter el texto definitivo que se elabore ante una Conferencia Especializada convocada al efecto.

Igualmente resolvió la Conferencia por medio de su Resolución XXI, exhortar a los Estados miembros de la Organización, que no hayan ratificado aún la Convención sobre Asilo Territorial firmada en Caracas en 1954, que la ratifiquen y apliquen sus disposiciones a los refugiados procedentes de Cuba en la medida de las conveniencias y de las posibilidades materiales de cada país. Esta Resolución, además, recomendó a dichos Estados la expedición de documentos de viaje en favor de los asilados políticos, y encargó al Comité Jurídico Interamericano que preparase, oída la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un proyecto de convención sobre refugiados.

En virtud de la Resolución XXV se declaró la Conferencia contraria a toda discriminación racial, y exhortó a los pueblos americanos a que ratificaran la concepción democrática del Estado, desarrollando una política tendiente a la completa integración de los ciudadanos sin distinción de tipo racial.

En febrero de 1967 tuvo lugar la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria en Buenos Aires. Esta reunión, convocada para considerar la aprobación de una serie de reformas a la Carta de la Organización, de acuerdo con las recomendaciones hechas por la Comisión Especial reunida en Panamá en 1966, es de relevante importancia para la causa de los derechos humanos.

¹ Para una relación detallada de estas disposiciones véase la parte correspondiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

² Para una relación detallada véase la parte concerniente al Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos.

the Commission on Human Rights was assigned the preparation of the program of activities for that purpose.

Likewise important for human rights was Resolution XXIV, which provided for entrusting to the Council of the Organization the task of bringing up to date and completing the Draft Convention on Human Rights prepared by the Inter-American Council of Jurists in 1959, in the fulfillment of which it would first receive the views of the Inter-American Commission on Human Rights and would also take into consideration the draft Conventions presented to this Conference by the Governments of Chile and Uruguay.²

The Conference likewise concerned itself with advancing the development of a final text for the Draft Convention on Freedom of Expression, Information and Investigation, which was at the time under study by the member Governments of the Organization. Resolution XX accordingly requested the Inter-American Commission on Human Rights to extend the period in which the governments might transmit their observations, for the purpose of submitting its final text to a Specialized Conference.

In addition, by means of Resolution XXI, the Conference resolved to urge the member states of the Organization that has not yet ratified the Convention on Territorial Asylum signed at Caracas in 1954 to do so, and to apply its provisions to the refugees from Cuba according to the facilities and material possibilities of each country. Further, this resolution recommended to the states that they issue travel documents to political asylees, and charged the Inter-American Juridical Committee to prepare a draft convention on refugees, after consulting the Inter-American Commission on Human Rights.

In Resolution XXV the Conference declared itself opposed to all racial discrimination, and urged the peoples of America to reaffirm the democratic concept of the state, developing a policy tending toward complete integration of the citizenry without distinction based on racial origin.

In February, 1967, the Third Special Inter-American Conference was held at Buenos Aires. This meeting, convened to consider approval of a series of amendments to the Charter of the Organization, in conformity with the Special Commission that had met in Panama in 1966, contains relevant matters of importance to the cause of human rights.

As a result of its work, the Third Conference passed a "Protocol of Amendment to the Charter," to be called the "Protocol of Buenos Aires", which will enter into force on ratification by two-thirds of the states signatories of the Charter. As to the remaining states, it will enter into force in the order in which they deposit their instruments of ratification.

The Protocol of Buenos Aires includes the Inter-American Commission on Human Rights among the organs by means of which the Organization of American States accomplishes its purposes (Article 51, letter (e) of the amended Charter).

The Commission, already granted greater authority by the Second Special Inter-American Conference, which extended its powers, is to acquire a new position by directive of the Third Conference, which raised it to the rank of principal organ of the Inter-American System. When the Protocol of Buenos Aires enters into force, the present Inter-American Commission on Human Rights will continue carrying out the functions which Articles 9 and 9 (bis) of its Statute assign to it and which is

² A detailed account appears in the section on the Draft Inter-American Convention on Protection of Human Rights.

Como resultado de sus trabajos, la Tercera Conferencia aprobó un "Protocolo de Reformas a la Carta" que se acordó denominar "Protocolo de Buenos Aires", el cual entrará en vigor cuando lo ratifiquen los dos tercios de los Estados signatarios de la Carta. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden en que depositen sus instrumentos de ratificación.

El Protocolo de Buenos Aires incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre los órganos por medio de los cuales la Organización de los Estados Americanos realiza sus fines (Artículo 51, letra e) de la Carta reformada).

La Comisión, ya revestida de mayor autoridad por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria que amplió sus facultades, adquiere nueva categoría por mandato de la Tercera Conferencia, que la eleva a la condición de órgano principal de la Organización. Al entrar en vigor el Protocolo de Buenos Aires la actual Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá realizando la función que le atribuyen los Artículos 9 y 9 (bis) de su Estatuto y que consiste exactamente en la que se determina en el Artículo 112 de dicho Protocolo como función principal, o sea "la de promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia."

Por otra parte, el propio Artículo 112 establece que una Convención Interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de la Comisión, así como de los otros órganos encargados de esa materia, y el Artículo 150 (transitorio) dispone que mientras no entre en vigor dicha Convención, la actual Comisión Interamericana de Derechos Humanos velará por la observancia de tales derechos.

exactly the same as what Article 112 of the Protocol establishes as its principal function, that is, "to promote the observance and protection of human rights and to serve as a consultative organ of the Organization in these matters".

Further, Article 112 provides that an Inter-American Convention on Human Rights shall determine the structure, competence, and procedure of the Commission, as well as those of other organs responsible for human rights matters; and Article 150 (a transitory provision) provides that until the aforesaid Convention enters into force, the present Inter-American Commission on Human Rights shall keep vigilance over the observance of human rights.

CAPITULO II

EL CONSEJO DE LA ORGANIZACION

La actividad desarrollada por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos en el campo de los derechos humanos ha sido notable durante el período 1960-1967. Cabe destacar, ante todo, la tarea que le correspondió realizar en relación con el establecimiento y organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por mandato de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Santiago, 1959), así como la importante labor que realizó respecto del Proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, por encargo de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria (Rio de Janeiro, 1965).

A. ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION DE LA COMISION INTER-AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Resolución VIII de la Quinta Reunión de Consulta, en su segundo párrafo, dispuso lo siguiente:

"Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se compondrá de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y tendrá las atribuciones específicas que éste le señale".

Para llevar a cabo esta labor, el Consejo determinó, en primer lugar, formular el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, su norma básica constitutiva, con arreglo a la cual realizaría sus funciones y objetivos. Y en segundo lugar, procedería a elegir los miembros integrantes de la misma.

1. ESTATUTO DE LA COMISION

Con el fin de preparar un texto de Estatuto, el Consejo nombró en septiembre de 1959 una Comisión Especial de siete miembros de su seno (Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos y Honduras) con el mandato de elaborar y someter al Consejo un proyecto sobre la organización y las atribuciones de la Comisión, a la luz de la Resolución citada.

En la sesión celebrada por el Consejo el 29 de octubre de 1959, la Comisión Especial sometió a la consideración del mismo un informe y un Proyecto de Estatuto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta misma sesión el Consejo tomó conocimiento de ambos documentos y solicitó de los representantes de los Estados Miembros que tuvieran observaciones que formular sobre dicho Proyecto se sirvieran transmitirlos a la brevedad posible al Secretario General de la Organización.

Este primer Proyecto constaba de 26 artículos, y de acuerdo con el informe de la Comisión Especial, trataba de fijar "las atribuciones y facultades de la Comisión en forma que pudiera actuar como órgano capaz de cumplir adecuadamente su mandato

CHAPTER II

THE COUNCIL OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

The activity carried on by the Council of the Organization of American States in the field of human rights has been noteworthy during the period 1960-1967. First of all should be mentioned the work that it accomplished in connection with the organization of the Inter-American Commission on Human Rights at the directive of the Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs (Santiago, 1959) as well as the important achievement of the Draft Inter-American Convention on Human Rights, at the behest of the Second Special Inter-American Conference (Rio de Janeiro, 1965).

A. ESTABLISHMENT AND ORGANIZATION OF THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Resolution VIII of the Fifth Meeting of Consultation resolves as follows in its second paragraph:

To create an Inter-American Commission on Human Rights, composed of seven members elected, as individuals, by the Council of the Organization of American States from panels of three names presented by the governments. The Commission, which shall be organized by the Council of the Organization and have the specific functions that the Council assigns to it, shall be charged with furthering respect for such rights.

In the accomplishment of this work the Council determined in the first instance that it would establish the Statute of the Commission, that is, its basic enabling legislation, in conformity with which it would carry out its functions and purposes; and in the second place it would proceed to elect the constituent members of the Commission.

1. STATUTE OF THE COMMISSION

For the purpose of preparing a draft Statute, the Council, in September, 1959, appointed a Special Committee of seven of its own members (the representatives of Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras and the United States) and requested it to prepare and submit to the Council a draft covering the organization and powers of the Commission, in the light of the above Resolution.

At the meeting of the Council held on October 29, 1959, the Special Committee submitted for consideration a report and draft Statute for the Inter-American Commission on Human Rights. The Council also took note of the latter document and requested the representatives of the member states to take it under study and to make known their observations at a later date.

This first draft consisted of 26 articles, and as stated in the Special Committee report, sought to establish the functions and powers of the Commission in such a form as to enable it to act in a manner capable of fulfilling adequately its mandate to

de promover el respeto de los derechos humanos dentro del articulado de la Carta y de los demás instrumentos interamericanos vigentes.”¹

Como resultado de los estudios y las observaciones realizados, dicho primer Proyecto fue modificando en algunos aspectos, especialmente en cuanto a la duración del período anual de actividades de la Comisión. Quedó en pie, sin embargo, lo más substancial del mismo, esto es, lo concerniente a las atribuciones y facultades de la Comisión para examinar las quejas y comunicaciones recibidas y para tramitar las mismas ante los Gobiernos de los Estados miembros.

En la sesión del Consejo de 16 de marzo de 1960, la Comisión Especial presentó un segundo informe y un segundo Proyecto de Estatuto para la Comisión de Derechos Humanos. En el informe, la Comisión Especial expresaba haber realizado esfuerzos extraordinarios para conciliar los distintos puntos de vista de los Gobiernos, ya que se trataba de un documento que no tenía la naturaleza de un tratado y para cuya vigencia se requería únicamente la aprobación del Consejo.²

Este segundo Proyecto de Estatuto, de 29 artículos, fue estudiado nuevamente por el Consejo a la luz de las observaciones y sugerencias de los Gobiernos representados en el mismo. En su sesión de 11 de mayo de 1960, la Comisión Especial, teniendo en cuenta dichas observaciones y sugerencias, presentó un tercer informe, con un tercer Proyecto de Estatuto de igual número de artículos, siendo las modificaciones más importantes las llevadas a cabo en cuanto a los Artículos 16 y 17 de su texto, que se refieren, respectivamente, a los derechos sujetos a tutela y al procedimiento de protección de los mismos.³

Finalmente, en la sesión del 25 de mayo de 1960, y tras amplio examen de su articulado, el Consejo procedió a la aprobación del Proyecto, el cual quedó reducido a 16 artículos. El Estatuto aprobado en esa sesión, por 20 votos a favor y una abstención, es el que rige en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta noviembre de 1965, fecha en que fue ampliado y fortalecido por la Resolución XXII de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria.⁴

Al cabo de seis meses de debates y estudios, el Consejo había dado cumplimiento a esta primera parte de la tarea encomendada por la Quinta Reunión de Consulta en 1959.

2. ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Como paso siguiente, encaminado a complementar la misión de organizar y establecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, correspondió al Consejo elegir a las personas que integrarían dicha entidad, de acuerdo con la citada Resolución VIII. Para este fin procedió a escoger, de entre las ternas presentadas por los Gobiernos, los siete miembros que debían integrarla. La elección tuvo lugar en la sesión celebrada el 29 de junio de 1960.⁵

¹ OEA/Ser.G/IV C-i-433, 27 octubre 1959

² OEA/Ser.G/IV C-i-449, 20 enero 1960

³ OEA/Ser.G/IV C-i-468, 9 mayo 1960

⁴ Véase el texto del Estatuto en la Parte IV, Documentos, p.

⁵ Una relación detallada de los miembros aparece en el Capítulo III, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

promote respect for human rights within the terms of the Charter and other inter-American instruments in force.¹

As a result of the studies that were made and the observations that were rendered, this draft was amended in several respects, especially in regard to the period of time each year during which the Commission would be in session. The most substantial feature of the draft, however, remained in place, that is, the provisions concerning the functions and powers of the Commission to examine communications and claims received by it and to deal with them before the governments of the member states.

At a meeting of the Council held on March 16, 1960, the Special Committee presented a second report and another draft Statute for the Commission on Human Rights. In the report, the Special Committee stated that it had devoted considerable effort to reconciling the different viewpoints of the governments, since the matter at hand involved an instrument that was not in the nature of a treaty and which required only approval by the Council to enter into force.²

This second draft Statute, containing 29 articles was studied anew by the Council in the light of the observations and suggestions of the member governments. At the meeting held on May 11, 1960, the Special Committee, taking account of these observations and suggestions, presented a third report along with a third draft Statute containing the same number of articles, the most important changes being those made in regard to Articles 16 and 17, referring respectively to the rights within the purview of the Commission and the procedures for their protection.³

At length, at the meeting held on May 25, 1960, and after extensive examination of its terms, the Council placed its approval on the Draft by twenty votes in favor and one abstention. The Statute as it was approved was reduced in length to 16 articles and is the same one that governs the Inter-American Commission on Human Rights at the present time, along with the enlargement of functions and powers authorized by Resolution XXII of the Second Special Inter-American Conference in 1965.⁴

Thus by the end of six months of deliberation and study, the Council had fulfilled this first phase of the task assigned to it by the Fifth Meeting of Consultation in 1959.

2. ELECTION OF THE MEMBERS OF THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

As the next step on the way to completing its mission to organize and establish the Inter-American Commission on Human Rights, it remained up to the Council to elect the persons who would compose it, in accordance with Resolution VIII of the Fifth Meeting of Consultation. The Council therefore proceeded to choose, from of the slates of candidates presented by the governments, the seven members involved. The election took place at the meeting held on June 29, 1960.⁵

Four years later, on expiration of the term of office established by the Statute, the

¹ OEA/Ser.G/IV C-i-433, October 27, 1959

² OEA/Ser.G/IV C-i-449, January 20, 1960

³ OEA/Ser.G/IV C-i-468, May 9, 1960.

⁴ Vid. text of the Statutes in Part IV, Documents, p.

⁵ A detailed account of the members appears in Chapter III, Inter-American Commission on Human Rights.

Cuatro años después, una vez vencido el término del mandato que fija el Estatuto, procedió el Consejo a la elección de los miembros para el cuatrenio 1964-1968. Dicha elección se verificó en la sesión del 3 de junio de 1964.⁶

B. PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, reunida en Río de Janeiro en 1965, encargó al Consejo de la Organización la tarea de actualizar y completar el Proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, preparado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en 1959.

En ese esfuerzo participó activamente la Comisión de Asuntos Jurídico-Políticos del Consejo, a cuyo cargo estuvo el estudio del proyecto de Convención.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE CONVENCION

Fue en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de La Paz (México, 1945) donde, por primera vez, los países americanos se pronunciaron en favor de un sistema de protección internacional de los derechos humanos y fue en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948) donde formularon, en términos más precisos, el principio de esa protección internacional. En efecto, la Conferencia de Bogotá determinó las etapas que deberían recorrerse en esta materia: la primera sería la simple enunciación de los derechos objeto de protección; y la siguiente, la aceptación de esos derechos como normas obligatorias cuya efectividad sería garantizada por un órgano jurídico. La propia Conferencia completó la primera etapa al aprobar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Resolución XXX) e inició inmediatamente la segunda al encomendarle al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un proyecto de Estatuto para la creación de una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre (Resolución XXXI).

El Comité Jurídico Interamericano, en el Informe ⁷ que sobre este asunto sometió al Consejo Interamericano de Jurisconsultos, señaló que la elaboración del Estatuto solicitado presentaba serias dificultades, debido, en gran parte, a la falta de derecho positivo sustantivo. En consecuencia, se limitó a insinuar que la elaboración de una convención debería preceder al estatuto cuya preparación la fuera encomendada. Por su parte, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, en su Segunda Reunión (Buenos Aires, 1953) aprobó la insinuación propuesta por el Comité de Río de Janeiro.

Con posterioridad a esta Reunión se hicieron nuevos esfuerzos con el objeto de crear un órgano jurisdiccional interamericano que se encargara de garantizar el respeto de los derechos humanos hasta que la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Santiago de Chile, 1959), en la Primera Parte de su Resolución VIII, le encomendó específicamente al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto o proyectos de convención sobre la creación de una Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y de otros órganos adecuados para la tutela y observancia de los mismos.

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos celebró su Cuarta Reunión pocos días después de la Quinta Reunión de Consulta (Santiago de Chile, 1959) y de

⁶ Ibid.

⁷ Comité Jurídico Interamericano, Informe sobre la Resolución XXXI de Bogotá (Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre), Unión Panamericana, Washington, D.C., 1950

Council elected the membership for the four-year period 1964-1968. This election was held at the meeting of June 3, 1964.⁶

B. DRAFT INTER-AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS.

The Second Special Inter-American Conference, meeting at Rio de Janeiro in 1965, assigned to the Council of the Organization the task of bringing up to date and completing the Draft Convention on Human Rights that had been prepared by the Inter-American Council of Jurists in 1959.

The Committee on Juridical-Political Affairs of the Council, which was placed in charge of a study of the draft convention, participated actively in this effort.

1. BACKGROUND OF THE DRAFT CONVENTION

It was the Inter-American Conference on Problems of War and Peace (Mexico City, 1945) that for the first time the American nations declared themselves in favor of an international system for the protection of human rights; and it was at the Ninth International Conference of American States (Bogotá, 1948) that they formulated more precisely the principles of such international protection. In sum, the Bogotá Conference established the phases of the subject that should have to be passed through: the first would be no more than the statement of the rights to be protected; and next, the acceptance of those rights as obligatory standards the observance of which would be guaranteed by a juridical body. The Conference completed the first stage by itself by approving the American Declaration of Rights and Duties of Man (Resolution XXX) and embarked at once on the second stage by entrusting the Inter-American Juridical Committee with the preparation of a draft Statute for the creation of an Inter-American Court designed to guarantee the rights of man (Resolution XXXI).

The Inter-American Juridical Committee, in the report on this subject that it submitted to the Inter-American Council of Jurists ⁷ indicated that the preparation of the requested report presented serious difficulties largely due to the lack of positive substantive law. Accordingly, the Committee limited itself to the suggestion that the drafting of a convention should come before the drafting of the statute that it had been requested to prepare. For its own part, the Inter-American Council of Jurists, at its Second Meeting (Buenos Aires, 1953), approved the suggestion proposed by the Rio de Janeiro Committee.

In the years following this Meeting there were renewed efforts directed toward the creation of a body with inter-American jurisdiction which would be charged with guaranteeing respect for human rights, culminating in the occasion on which the Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs (Santiago, Chile, 1959), in the First Part of Resolution VIII specifically entrusted to the Inter-American Council of Jurists the preparation of a draft convention or draft conventions on the creation of an Inter-American Court for the Protection of Human Rights and of other organizations appropriate for the protection and observance of those rights.

The Inter-American Council of Jurists held its Fourth Meeting a few days after the Fifth Meeting of Consultation (Santiago, Chile, 1959) and at once set about the preparation of the draft convention which had been expressly commissioned from it.

⁶ Vid. Chapter III, Inter-American Commission on Human Rights.

⁷ Inter-American Juridical Committee, Report to the Inter-American Council of Jurists Concerning Resolution XXXI of the Bogotá Conference (Inter-American Court to Protect the Rights of Man), Pan American Union, Washington, D.C., 1950.

inmediato se abocó a la preparación del proyecto de convención que le fuera expresamente encomendado. Por medio de su Resolución XX, dicho Consejo aprobó el 8 de septiembre de 1959 un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos que comprendía la parte substantiva, así como la parte institucional y procesal de los mismos, inclusive la creación y funcionamiento de una Corte Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos.

Dicho Proyecto de Convención consta de 88 artículos distribuidos en seis partes.

La Primera Parte se halla dividida en dos capítulos y comprende 33 artículos. El Capítulo I (Artículos 2 al 19) enumera y define los derechos civiles y políticos que deben ser objeto de protección internacional, tales como el derecho a la vida; a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a esclavitud o servidumbre, ni a ejecutar trabajos forzosos u obligatorios; el derecho a la libertad y a la seguridad personal; el derecho de protección contra la detención arbitraria; el derecho a proceso regular; el derecho a la protección de la ley contra ingerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o familiar; el derecho a la libertad de conciencia y de religión; el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; el derecho de reunión y de asociación; el derecho de igualdad ante la ley, y otros derechos civiles y políticos ya consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El Capítulo II (Artículos 20 al 33) se refiere a los derechos económicos sociales y culturales, entre los que menciona el derecho al trabajo; el derecho de los pueblos a la libre determinación; el derecho de fundar organizaciones o sindicatos; el derecho a la seguridad social; el derecho a la constitución y a la protección de la familia; el derecho a la educación y el derecho a la propiedad privada.

La Segunda Parte consta de un solo artículo (34), en el que, con el fin de asegurar la observancia de esos derechos, el Proyecto establece una Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Tercera Parte comprende dos capítulos. El primero, (Artículos 35 al 57) se refiere a la organización de la Comisión y a la protección de los derechos civiles y políticos y el segundo (Artículos 58 al 64) a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

La Cuarta Parte (Artículos 65 al 81) se halla dedicada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dispone en forma detallada respecto de su organización y competencia.

Finalmente la Quinta y Sexta Partes (Artículo 82 al 88) se refieren, respectivamente, a las disposiciones generales y a las cláusulas relacionadas con la firma, ratificación o adhesión, reservas, denuncias y enmiendas.

Este Proyecto de Convención, de acuerdo con los términos de la propia Resolución XX de la Cuarta Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, debería haber sido considerado por la Undécima Conferencia Interamericana programada para 1961. Como resultado de la postergación de esta Conferencia, este tema fue incorporado en el Programa de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria que se realizó en Río de Janeiro en noviembre de 1965.

2. MANDATO DE LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERAMERICANA EXTRAORDINARIA

La Segunda Conferencia, al abordar el tema, tuvo en cuenta que, a partir de 1959, fecha en que fue elaborado el Proyecto de Convención del Consejo Inter-

On September 8, 1959, as Resolution XX, the Council approved a draft Convention on Human Rights that comprised substantive, institutional and procedural parts, including provision for the creation and working of an Inter-American Court of Human Rights and an Inter-American Commission for the Protection of Human Rights.

The Draft Convention consists of 88 articles apportioned among six parts.

The First Part is divided into two chapters and comprises 33 articles. Chapter I (Articles 2 through 19) enumerates and defines the civil and political rights that are to be the object of international protection, such as: the right to life; the right not to be subjected to torture, cruel, inhumane or degrading treatment, or to slavery or servitude, or to the performance of forced or obligatory labor; the right to liberty and personal security; the right to protection against arbitrary detention; the right to due process of law; the right to the protection of the law against arbitrary interference with one's private or family life; the right to freedom of conscience and religion; the right to freedom of thought and expression; the right of assembly and association; the right to equal protection of the law, together with other civil and political rights already set forth in the American Declaration of the Rights and Duties of Man. Chapter II (Articles 20 through 33) refers to the economic, social and cultural rights and takes note of, among others, the right to work; the right of self-determination of peoples; the right to establish organizations and unions; the right to social security; the right to establish a family and to have protection for the same; the right to education, and the right to private property.

The Second Part consists of a single article (34) in which, for the purpose of securing the observance of those rights, the draft establishes an Inter-American Commission for the Protection of Human Rights and an Inter-American Court of Human Rights.

The Third Part comprises two chapters. The first (Articles 35 through 57), refers to the organization of the Commission and to the protection of the civil and political rights; and the second (Articles 58 through 64) refers to the protection of the economic, social, and cultural rights.

The fourth part (Articles 65 through 81) is devoted to the Inter-American Court of Human Rights and provides in detail for its organization and powers.

Finally, the Fifth and Sixth Parts (Articles 82 through 88) deal respectively with general provisions and with the clauses covering signing, ratification or adherence, reservation, denunciation and amendment.

By the very terms of Resolution XX of the Fourth Meeting of the Inter-American Council of Jurists, this draft Convention was to have been considered by the Eleventh Inter-American Conference scheduled for 1961. Because of the postponement of this Conference, this subject was made part of the Agenda of the Second Special Inter-American Conference which took place in Rio de Janeiro in November, 1965.

2. REQUEST OF THE SECOND SPECIAL INTER-AMERICAN CONFERENCE

In approaching the subject the Second Conference took into account that dating from 1959, when the Draft Convention of the Inter-American Council of Jurists had been prepared, important measures had been undertaken to secure respect for human rights, not only on the international level, but also on the internal level among the American nations; and among these measures the Conference singled out the creation of the Inter-American Commission on Human Rights, the Statute of which had been approved in 1960 and the work of which, in the course of six years, had been carried

americano de Jurisconsultos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno de los Estados se habían tomado medidas importantes encaminadas a asegurar el respeto a los derechos humanos; y entre esas medidas destacaba la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo Estatuto había sido aprobado en 1960 y cuya labor, en el curso de seis años, se había desarrollado en forma "constante y dedicada" con el objeto de "estimular la conciencia de los derechos humanos y de lograr medidas progresivas para la protección de esos derechos".

Además, la Segunda Conferencia tomó en consideración el hecho de que, habiendo transcurrido diecisiete años de la aprobación de la Declaración Americana, parecía "conveniente y oportuno" que los Estados Americanos ofrecieran a los derechos fundamentales de la persona humana una protección con base convencional.

Así, pues, en su Resolución XXIV,⁸ la Conferencia dispuso enviar al Consejo de la Organización el Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos preparado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, además de los proyectos de convención presentados por los Gobiernos de Chile y Uruguay en esa Conferencia, solicitando de dicho Consejo que introdujera en el primero de esos Proyectos las enmiendas que juzgara necesarias para actualizarlo y completarlo.

Disponía la referida Resolución que el Consejo de la Organización, al llevar a cabo su tarea, oyese previamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros órganos y entidades que estimara conveniente.

En segundo lugar, disponía que el Proyecto así revisado, se sometiera a los Gobiernos para que éstos formularan las observaciones y enmiendas que juzgaran pertinentes y, en tercer lugar, que el Consejo convocara a una Conferencia Especializada Interamericana que considerara el aludido proyecto, conjuntamente con las observaciones y enmiendas de los Gobiernos, y decidiera sobre la aprobación y firma de una Convención de Derechos Humanos.

3. EXAMEN DEL PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ELABORADO POR EL CONSEJO INTER-AMERICANO DE JURISCONSULTOS.

El Consejo, teniendo a la vista los tres citados Proyectos de Convención, encomendó a su Comisión de Asuntos Jurídico-Políticos el estudio y consideración de los mismos, a los efectos de que dicha Comisión recomendara las enmiendas que creyese conveniente en el texto del Proyecto de Jurisconsultos.

En el curso de sus reuniones, la referida Comisión examinó los artículos de este último Proyecto de Convención, los cuales comprenden los derechos civiles y políticos. Estas labores se vieron parcialmente interrumpidas por las numerosas e impostergables tareas vinculadas con la reforma de la Carta de la Organización, que ocuparon buena parte de la atención de sus miembros durante el año 1966.

Durante la sesión del Consejo de 18 de mayo de 1966, el Consejo tomó conocimiento de las observaciones y comentarios formulados por su Comisión de Asuntos Jurídico-Políticos, en torno al Proyecto de Convención del Consejo Interamericano de Jurisconsultos. En virtud de ello, el Consejo resolvió trasladar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el llamado Proyecto de los Jurisconsultos, conjuntamente con los proyectos de los Gobiernos de Chile y Uruguay, solicitando de esa

⁸ Véase texto de la Resolución XXIV, Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, Rio de Janeiro, 1965, en la Parte IV, Documentos.

on in a constant and devoted manner with the purpose "to stimulate awareness of human rights and to have progressive measures taken to protect those rights."

Further, the Second Conference took into consideration the fact that, seventeen years having passed since the approval of the American Declaration, it appeared "fitting and timely" that the American States should extend to the fundamental rights of the individual a protection having its basis in a convention.

Thus, in Resolution XXIV⁸ the Conference decided to send to the Council of the Organization the Draft Convention on Human Rights prepared by the Inter-American Council of Jurists, together with the draft conventions presented to the Conference by the Governments of Chile and Uruguay, and to request the Council of the Organization to place in the first of the above draft instruments the amendments deemed necessary in order to bring it up to date and complete it.

Resolution XXIV also provided that the Council of the Organization, in accomplishing its task, should first have the views of the Inter-American Commission on Human Rights and of other organs and bodies it may deem it advisable to hear.

Further, the resolution provided that, once revised, the Draft should be submitted to the Governments so that they might make the observations and changes that they judge appropriate; and lastly, it provided that the Council convoke an Inter-American Specialized Conference to consider the draft, together with the observations and amendments of the governments, and to decide on the approval and signing of a Convention on Human Rights.

3. EXAMINATION OF THE DRAFT INTER-AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS PREPARED BY THE INTER-AMERICAN COUNCIL OF JURISTS

Having before it these three draft Conventions, the Council requested its Committee on Juridical-Political Affairs to study them, to the end that the Committee might recommend the amendments to the text of the Council of Jurists draft that it believed advisable.

During the course of its meetings, this Committee examined the articles of the draft dealing with civil and political rights. Some interruption of these labors was due to many pressing matters connected with amendment of the Charter of the Organization, which occupied a good part of the Committee members' attention during the year 1966.

At its meeting held on May 18, 1966, the Council took note of the observations and comments made by the Committee on Juridical-Political Affairs with regard to the draft Convention of the Inter-American Council of Jurists. Accordingly, the Council decided to transmit the Council of Jurists draft, together with those of the governments of Chile and Uruguay, to the Inter-American Commission on Human Rights with the request that it render an opinion of the matter and make it known to the Council.

The Inter-American Commission on Human Rights in complying with the request of the Council studied the documents involved during its Fourteenth Session, at the conclusion of which (October 21, 1966) it issued the first part of the Opinion in which it expressed its appraisal of the terms of the Draft Convention covering civil and political rights (Articles 1 to 19).⁹

⁸ Vid. text of Resolution XXIV, Second Special Inter-American Conference, Rio de Janeiro, 1965, Part IV, Documents.

⁹ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 26, October 26, 1966.

Comisión que emitiera su criterio respecto de la materia, y lo hiciera saber al Consejo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo a la solicitud del Consejo de la Organización, estudió los referidos documentos durante su Décimocuarto y Décimoquinto Períodos de Sesiones, al término de los cuales emitió un Dictamen (Primera y Segunda Partes, respectivamente) que transmitió al Consejo en marzo de 1967.⁹

4. ESTUDIO DEL DICTAMEN DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

El Consejo de la Organización procedió a considerar el Dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por intermedio de su Comisión de Asuntos Jurídico-Políticos. En la sesión del 5 de mayo de 1967 la Comisión tomó conocimiento de la Primera y Segunda Parte del Dictamen, así como de la documentación que sobre esta materia le fue suministrada por la Secretaría General. En el curso de esta sesión la Comisión observó que, con fecha 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado tres resoluciones, marcadas con las letras A, B y C, relativas a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

De acuerdo con la Resolución A, adoptada por unanimidad, la Asamblea aprobó y abrió a la firma, ratificación y adhesión de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los tres instrumentos siguientes: a) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; b) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y c) el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Comisión observó, asimismo, que los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, habían sido suscritos hasta ese momento por cuatro países americanos, a saber: Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay.

Al examinar las anteriores resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión pudo observar lo siguiente:

a. Que las disposiciones del Proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos relativas a la parte normativa o sustantiva en materia de derechos humanos son similares a las contenidas en los mencionados Pactos de las Naciones Unidas. Esta circunstancia se debe, seguramente, al hecho de que el Proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos está basado en los Proyectos de Pactos preparados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Resolución XXIV de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, en su parte considerativa, reconoció esta situación al expresar "que ese Proyecto [del Consejo Interamericano de Jurisconsultos] se basó en la Convención Europea sobre Derechos Humanos (Roma, 1950) y en los proyectos de pactos preparados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1952-1953 y que hasta 1959 sólo habían sido examinados parcialmente por la III Comisión de la Asamblea General".

b. Que las normas institucionales y procesales del Proyecto del Consejo de Jurisconsultos difieren de las adoptadas en los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas. En lo que respecta a los derechos civiles y políticos, el Proyecto del Consejo

For the purpose of completing its study of the Draft, the Commission on Human Rights held a Special Session, at the end of which (January 19, 1967) it adopted the Second Part of the Opinion, covering the remaining provisions (Articles 20 to 64).¹⁰

In its Opinion, the Commission on Human Rights recommended the preparation of a Convention of a sort likely to be ratified by the Governments, i.e., an instrument that would limit itself to the protection of the fundamental human rights and would provide in precise form for means of application. The Commission likewise stated that in making its judgement, it had taken into account the experience of the European countries under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the debates that took place during the preparation of the United Nations Draft International Covenants on Human Rights, as well as the constitutional and legislative history of the American nations.

In its study of the text of the Inter-American Council of Jurists draft, the Commission on Human Rights considered first the series of articles comprising the civil and political rights (Articles 1 through 19), suggesting certain modifications, as well as the incorporation of several new articles. As for the rights identified as economic, social and cultural (Articles 20 through 33), the Commission expressed doubt over their inclusion in the Draft Convention, considering that those rights should be covered by a special system of international protection. It judged it desirable, however, that the future Convention provide for the States to acknowledge the need to incorporate into their domestic legislation the necessary measures for implementing such rights, the possibility remaining that a special convention might be signed or supplementary protocols to the Convention under study might be concluded, in order to incorporate the measures in this field which already enjoyed a general acceptance.

With respect to the provisions of the Second, Third, and Fourth Parts of the Draft (Articles 34 to 88), the Commission also suggested a number of changes.

4. STUDY OF THE OPINION OF THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND OF THE INTERNATIONAL COVENANTS OF THE UNITED NATIONS

The Council of the Organization undertook consideration of the Opinion of the Inter-American Commission on Human Rights through its Committee on Juridical-Political Affairs. At the meeting held on May 5, 1967, the Committee took note of the First and Second Parts of the Opinion, as well as of certain relevant documentation which was furnished by the General Secretariat. During this meeting, the Committee also noted that on December 16, 1966, the General Assembly of the United Nations had passed three resolutions, designated A, B and C, concerning the International Covenants on Human Rights.

In accordance with resolution A, which was adopted by unanimous vote, the Assembly approved and opened for the signature, ratification, and accession of the member states of the United Nations the following three instruments: a) the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; b) the International Covenant on Civil and Political Rights and c) the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.

The Committee also made the observation that the International Covenants on Economic, Social, and Cultural Rights, and on Civil and Political Rights had been signed

⁹ En el Capítulo III, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparece una relación de las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la misma respecto del Proyecto de Convención.

¹⁰ OEA/Ser.L/V/II.16 Doc. 8 (Rev.), March 27, 1967.

de Jurisconsultos contempla el establecimiento de una Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se limita al establecimiento de un Comité de Derechos Humanos. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, el Proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos enumera una serie de medidas tendientes a garantizar la observancia de esos derechos, tales como las informaciones o informes que según los Artículos 58 y 59 deben suministrar los Estados Partes en la Convención; observaciones y recomendaciones; estudios e investigaciones; publicidad de las medidas adoptadas, etc. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas estipula que los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre las medidas que hubiesen adoptado para asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el mismo. Esos informes deben ser presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al Consejo Económico y Social, para que éste, a su vez, los someta a la Comisión de Derechos Humanos.

c. Que, de aprobarse las propuestas de las Naciones Unidas para la creación de Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, tal como se sugiere en la Resolución C ya citada, se establecería un nuevo mecanismo al nivel nacional para la protección de los derechos humanos, que podría entrar en conflicto con los procedimientos previstos en el Proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos.

d. Que el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, aprobado el 27 de febrero de 1967 por la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, en su Artículo 112, dispone:

Habrà una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia.

5. CONSULTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

En vista de estas consideraciones, la Comisión de Asuntos Jurídico-Políticos, antes de proseguir el estudio del Proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y deseando evitar el peligro de posibles conflictos de normas y de instituciones mundiales y regionales, acordó solicitar del Consejo de la Organización que eleve una consulta a los Estados miembros respecto de las siguientes cuestiones:

1a. Si los gobiernos de los Estados americanos, al aprobar en el Vigésimoprimer Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las Resoluciones A, B y C, relativas a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, quisieron establecer una reglamentación universal y única de los derechos humanos; o si, por el contrario, contemplaron la posibilidad de la coexistencia y coordinación de las convenciones universales y regionales para los mismos derechos.

2a. Si, en la segunda hipótesis, los mismos Gobiernos estiman que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, prevista en el Artículo 112 del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, debiera limitarse a establecer un sistema institucional y procesal interamericano para la protección de esos derechos, que comprenda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, eventualmente, una Corte Interamericana de Derechos Humanos.

to date by four American countries, namely: Colombia, Costa Rica, Honduras, and Uruguay.

Upon examining the foregoing resolutions of the General Assembly of the United Nations, the Committee was in a position to observe the following:

a. That the provisions in the regulatory and substantive part of the draft of the Inter-American Council of Jurists on human rights are similar to those contained in the aforementioned covenants of the United Nations. No doubt this is due to the fact that the draft of the Inter-American Council of Jurists was based on the draft covenants prepared by the United Nations Commission on Human Rights. Resolution XXIV of the Second Special Inter-American Conference recognized this in its preamble, when it said, "this draft [of the Inter-American Council of Jurists] was based on the European Convention on Human Rights (Rome, 1950) and on the draft covenants prepared by the United Nations Commission on Human Rights in 1952-1953, which up to 1959 had been only partially studied by the Third Committee of the General Assembly."

b. That the institutional and procedural standards contained in the draft of the Inter-American Council of Jurists differ from those adopted in the United Nations international covenants. As regards civil and political rights, the draft of the Council of Jurists contemplates the establishment of an Inter-American Commission for the Protection of Human Rights and an Inter-American Court of Human Rights, while the International Covenant on Civil and Political Rights limits itself to the establishment of a Human Rights Committee. As regards economic, social, and cultural rights, the draft of the Inter-American Council of Jurists lists a series of measures intended to guarantee the observance of those rights, such as the data or reports that the states parties to the convention are to provide, in accordance with Articles 58 and 59; studies and research; publicizing the measures adopted; and so on. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, of the United Nations, stipulates that the states parties to the covenant undertake to present reports on the measures they have taken to assure respect for the rights recognized therein. These reports are to be presented to the Secretary-General of the United Nations, who will transmit them to the Economic and Social Council, so that it in turn may submit them to the Commission on Human Rights.

c. That if the proposals of the United Nations for creating national commissions on human rights, as suggested in the aforementioned Resolution C, were approved, a new mechanism would be established at the national level for the protection of human rights, which could conflict with the procedures contemplated in the draft of the Inter-American Council of Jurists.

d. That the Protocol of Amendment to the Charter of the Organization of American States, approved on February 27, 1967, by the Third Special Inter-American Conference, provides as follows in its Article 112:

There shall be an Inter-American Commission on Human Rights, whose principal function shall be to promote the observance and protection of human rights and to serve as a consultative organ of the Organization in these matters.

An inter-American convention on human rights shall determine the structure, competence, and procedure of this Commission, as well as those of other organs responsible for these matters.

5. CONSULTATION WITH THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES

In view of these considerations, the Committee on Juridical-Political Affairs,

En cuanto a las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos mencionadas en la Resolución C de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Asuntos Jurídico-Políticos estima que sería de suma utilidad, para los trabajos que se realicen en este campo, que los gobiernos de los Estados miembros suministren al Consejo de la Organización sus opiniones sobre las funciones y atribuciones que tendrían esas comisiones y sus relaciones con los órganos, universales o regionales, que pudieran crearse para la protección internacional de los derechos humanos.

El Consejo, al aceptar las recomendaciones expuestas por la Comisión de Asuntos Jurídico-Políticos en su informe de 31 de mayo de 1967, resolvió, en su sesión de 7 de junio de 1967, transmitir a los gobiernos de los Estados miembros, por intermedio de sus Representantes en el Consejo, la consulta a que se refieren los párrafos anteriores.¹⁰

Al elevar dicha consulta a los Estados americanos, el Consejo sugirió como plazo para las respuestas el 1° de septiembre de 1967.

Hasta el 31 de diciembre de 1967 se habían recibido respuestas de diez Gobiernos, la mayoría de los cuales consideraba que la firma de los pactos universales no excluía la posibilidad de elaborar una convención regional, la que debería coordinarse con los Pactos Internacionales de Naciones Unidas.

decided, before going further with the study of the Draft Inter-American Convention on Human Rights, and in the desire to avoid the danger of possible conflicts of worldwide and regional rules and institutions, to request the Council of the Organization to consult the member states in regard to the following questions:

1. Whether the governments of the American states, in approving, at the Twenty-First Session of the General Assembly of the United Nations, Resolutions A, B, and C, concerning the international covenants on human rights, wished to establish a single universal system of regulation of human rights; or whether on the contrary they contemplated the possibility of the coexistence and coordination of the worldwide and regional conventions on the same rights.

2. Whether, in the latter case, those governments consider that the Inter-American Convention on Human Rights provided for in Article 112 of the Protocol of Amendment to the Charter of the Organization of American States should be limited to establishing an inter-American institutional and procedural system for the protection of those rights that would include the Inter-American Commission on Human Rights, and, eventually, an Inter-American Court of Human Rights.

With regard to the national commissions on human rights mentioned in Resolution C of the General Assembly of the United Nations, the Committee on Juridical-Political Affairs considers that it would be most useful for the work that is done in this field if the governments of the member states would provide the Council of the Organization with their views concerning the functions and powers these commissions would have and their relationship to the worldwide or regional organs that might be created for the international protection of human rights.

The Council, on accepting the recommendations stated by the Committee on Juridical-Political Affairs in its report dated May 31, 1967, resolved, at its meeting held on June 7, 1967, to transmit to the governments of the member states, through their representatives on the Council, the consultation described above.¹¹

In making this consultation to the American states, the Council suggested that the governments reply before September 1, 1967.

At December 31, 1967, the replies of ten governments had been received, the majority of which considered that the signing of the universal covenants did not exclude the possibility of preparing a regional convention, which should be coordinated with the International Covenants of the United Nations.

¹⁰ OEA/Ser.G/IV C-i-787 Rev. 2, 1 junio 1967

¹¹ OEA/Ser.G/IV C-i-787 Rev. 2, June 1, 1967

CAPITULO III

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

A. ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION

De conformidad con su Estatuto, aprobado por el Consejo de la Organización el 25 de mayo de 1960,¹ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "es una entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato es promover el respeto de los derechos humanos" (Artículo 1) entendiéndose por derechos humanos "los consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" (Artículo 2).

De acuerdo con el propio Estatuto, el Consejo de la Organización, en sesión de 29 de junio de 1960, eligió los siete miembros que integrarían la Comisión por el cuatrenio 1960-1964. Dichos miembros fueron los siguientes:

Lcda. Angela Acuña de Chacón	(Costa Rica)
Prof. Manuel Bianchi	(Chile)
Dr. Gonzalo Escudero	(Ecuador)
Dr. Gabino Fraga	(México)
Dr. Reynaldo Galindo Pohl	(El Salvador)
Prof. Rómulo Gallegos ²	(Venezuela)
Dr. Durward V. Sandifer	(Estados Unidos)

Para el cuatrenio 1964-1968 el Consejo de la Organización eligió, en la sesión celebrada el 3 de junio de 1964, a los miembros siguientes:

Lcda. Angela Acuña de Chacón	(Costa Rica)
Prof. Manuel Bianchi Gundián	(Chile)
Dr. Gonzalo Escudero	(Ecuador)
Dr. Gabino Fraga	(México)
Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches	(Brasil)
Dr. Daniel Hugo Martins	(Uruguay)
Dr. Durward V. Sandifer	(Estados Unidos)

De acuerdo con el inciso b) del Artículo 3 del Estatuto, los Miembros de la Comisión representan a todos los países que integran la Organización de los Estados Americanos y actúan en su nombre. La elección de los mismos, según se advierte, es por un término de cuatro años. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por la mayoría absoluta de los Miembros para un período de dos años y pueden ser reelegidos. (Artículo 6).

Conforme con esta disposición, la Comisión eligió, para el período comprendido

¹ Doc. OEA/Ser.G/HIC-a-371, 25 mayo 1960.

² El Sr. Gallegos, por razones de salud, presentó renuncia de su cargo de Miembro de la Comisión el 10 de mayo de 1963. El Consejo de la Organización, en sesión de 3 de julio del mismo año, eligió al Dr. Daniel Hugo Martins, del Uruguay, para cubrir la vacante ocurrida con la mencionada renuncia.

CHAPTER III

THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

A. ESTABLISHMENT AND ORGANIZATION

According to its Statute, which was approved by the Council of the Organization on May 25, 1960,¹ the Inter-American Commission on Human Rights "is an autonomous entity of the Organization of American States, the function of which is to promote respect for human rights" (Article 1), human rights being understood to be "those set forth in the American Declaration of the Rights and Duties of Man" (Article 2).

By the terms of the Statute, the Council of the Organization, at its meeting held on June 29, 1960, elected the seven members who would compose the Commission for the four-year period running from 1960 to 1964. The following were elected:

Lcda. Angela Acuña de Chacón	(Costa Rica)
Prof. Manuel Bianchi Gundián	(Chile)
Dr. Gonzalo Escudero	(Ecuador)
Dr. Gabino Fraga	(México)
Dr. Reynaldo Galindo Pohl	(El Salvador)
Prof. Rómulo Gallegos ²	(Venezuela)
Dr. Durward V. Sandifer	(United States)

For the four-year period running from 1964 to 1968, the Council of the Organization elected, at the meeting held on June 3, 1964, the following members:

Lcda. Angela Acuña de Chacón	(Costa Rica)
Prof. Manuel Bianchi Gundián	(Chile)
Dr. Gonzalo Escudero	(Ecuador)
Dr. Gabino Fraga	(México)
Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches	(Brazil)
Dr. Daniel Hugo Martins	(Uruguay)
Dr. Durward V. Sandifer	(United States)

By paragraph b) of Article 3 of the Statute, the Members of the Commission represent all the countries comprising the Organization of American States and act in their name. The term of office, as has been noted, is four years. The Chairman and Vice Chairman are elected by an absolute majority of the members to serve for a period of two years and may be re-elected (Article 6).

In accordance with this provision, the Commission elected for the period 1960-1962 Mr. Rómulo Gallegos and Prof. Manuel Bianchi as Chairman and Vice Chairman, respectively.

¹ OEA/Ser.G/H C-a-371, May 25, 1960.

² For reasons of health, Mr. Gallegos resigned his position as Member of the Commission on May 10, 1963. The Council of the Organization, at its meeting held on July 3 of that year, elected Dr. Daniel Hugo Martins, of Uruguay, to fill the vacancy arising from the aforementioned resignation.

entre 1960 y 1962, al Sr. don Rómulo Gallegos y al Prof. Manuel Bianchi con el carácter de Presidente y Vicepresidente, respectivamente.

En 1962 la Comisión eligió para Presidente al Prof. Bianchi, y para la Vicepresidencia al Dr. Gabino Fraga. Al término de sus mandatos, en 1964, ambos miembros resultaron reelegidos, volviendo a reelegirse en 1966 para cubrir el período que termina en 1968.

Las reuniones de la Comisión se llevan a cabo durante un máximo de ocho semanas al año, en uno o dos períodos de sesiones ordinarias, según lo resuelva la propia Comisión y sin perjuicio de que pueda celebrar reuniones extraordinarias cuando sea convocada por el Presidente o a petición de la mayoría de los Miembros (Artículo 11, b).

La Comisión ha celebrado entre 1960 y 1967 dieciocho períodos de sesiones, quince de carácter ordinario y tres extraordinarios, a saber:

Primer Período Ordinario	3 a 28 de octubre, 1960
Segundo Período Ordinario	10 a 26 de abril, 1961
Tercer Período Ordinario	2 de octubre-4 de noviembre, 1961
Cuarto Período Ordinario	2 a 27 de abril, 1962
Quinto Período Ordinario	24 de septiembre a 26 de octubre, 1962
Primer Período Extraordinario	3 a 23 de enero, 1963
Sexto Período Ordinario	16 de abril a 8 de mayo, 1963
Séptimo Período Ordinario	7 a 24 de octubre, 1963
Octavo Período Ordinario	6 a 24 de abril, 1964
Noveno Período Ordinario	5 a 15 de octubre, 1964
Décimo Período Ordinario	15 a 26 de marzo, 1965
Undécimo Período (Extraordinario)	21 a 23 de julio, 1965
Duodécimo Período Ordinario	4 a 15 de octubre, 1965
Décimotercer Período Ordinario	18 a 28 de abril, 1966
Décimocuarto Período Ordinario	3 a 21 de octubre, 1966
Décimoquinto Período (Extraordinario)	9 a 20 de enero, 1967
Décimosexto Período Ordinario	24 de abril a 3 de mayo, 1967
Décimoseptimo Período Ordinario	9 a 20 de octubre, 1967

La Comisión celebró los seis primeros períodos ordinarios en su sede permanente, la Unión Panamericana, en Washington, D.C., con excepción de algunas sesiones de los períodos tercero y sexto que se llevaron a cabo en la República Dominicana. El Séptimo Período se verificó en Santiago de Chile, donde también tuvo lugar el Décimosexto Período. El Primer Período Extraordinario se celebró parte en la ciudad de Washington y parte en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. El Décimotercer Período hubo de realizarse en la Ciudad de México. El Octavo, Noveno, Décimo, Undécimo (Extraordinario), Duodécimo, Décimocuarto, Décimoquinto y Décimoseptimo Períodos de Sesiones tuvieron lugar en su sede permanente.

Durante sus dieciocho períodos de trabajo la Comisión celebró 253 sesiones. De conformidad con el Estatuto, la Comisión puede celebrar reuniones fuera de su sede permanente, trasladándose al territorio de cualquier Estado americano cuando lo decida por mayoría absoluta de votos y previa la anuencia del Gobierno respectivo (Artículo 11, c).

B. SECRETARIA DE LA COMISION

El Secretario General de la Organización designa al personal técnico y administrativo de la Secretaría de la Comisión. La Secretaría forma parte del personal de la Unión Panamericana, sus gastos están incluidos en el presupuesto de la misma y

In 1962 the Commission elected Prof. Bianchi to be Chairman and Dr. Gabino Fraga to be Vice Chairman. At the end of their terms in 1964, both members were re-elected, and were again re-elected in 1966 for the period to end in 1968.

The Commission meets for a maximum of eight weeks per year, in one or two regular sessions, as the Commission itself shall determine, notwithstanding which it may hold special sessions when convoked by the Chairman or at the request of a majority of the members (Article 11 b.).

Between 1960 and 1967 the Commission has held eighteen sessions, sixteen regular and two special, as follows:

First Regular Session	October 3 to 28, 1960
Second Regular Session	April 10 to 26, 1961
Third Regular Session	October 2 to November 4, 1961
Fourth Regular Session	April 2 to 27, 1962
Fifth Regular Session	September 24 to October 26, 1962
First Special Session	January 3 to 23, 1963
Sixth Regular Session	April 16 to May 8, 1963
Seventh Regular Session	October 7 to 24, 1963
Eighth Regular Session	April 6 to 24, 1964
Ninth Regular Session	October 5 to 15, 1964
Tenth Regular Session	March 15 to 26, 1965
Eleventh Session (Special)	July 21 to 23, 1965
Twelfth Regular Session	October 4 to 15, 1965
Thirteenth Regular Session	April 18 to 28, 1966
Fourteenth Regular Session	October 3 to 21, 1966
Fifteenth Session (Special)	January 9 to 20, 1967
Sixteenth Regular Session	April 24 to May 3, 1967
Seventeenth Regular Session	October 9 to 20, 1967

The Commission held the first six regular sessions at its permanent headquarters, the Pan American Union, in Washington, D. C., except for some meetings of the Third and Sixth Sessions, which were held in the Dominican Republic. The Seventh and Sixteenth Sessions took place in Santiago, Chile. The First Special Session was held partly in Washington and partly in Miami, Florida, U. S. A. The Thirteenth Session convened in Mexico City. The Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh (Special), Twelfth, Fourteenth, Fifteenth, and Seventeenth Sessions were held at the permanent headquarters.

During its eighteen working sessions the Commission held 253 meetings. In accordance with its Statute, the Commission may hold meetings away from its permanent headquarters, moving to the territory of any American state, with the prior consent of the government concerned, when the Commission so decides by an absolute majority of votes (Article 11 c.).

B. SECRETARIAT OF THE COMMISSION

The Secretary General of the Organization appoints the technical and administrative personnel of the Secretariat of the Commission. The Secretariat is part of the personnel of the Pan American Union, with its expenses being included in the Pan American Union budget, and is organized as a specialized functional unit to perform the tasks entrusted to it by the Commission (Articles 14 and 14 (bis)).

está organizada como unidad funcional especializada a fin de cumplir con las tareas que le encomienda la Comisión (Artículos 14 y 14 bis).

Al 31 de diciembre de 1967, la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra formada por el siguiente personal:

Dr. Luis Reque, Secretario Ejecutivo;
Dr. Guillermo Cabrera, Funcionario técnico;
Dr. Alvaro Gómez, Funcionario técnico;
Dr. Robert Johnston, Funcionario técnico.

C. COMPETENCIA

El Estatuto aprobado por el Consejo de la Organización en 1960 otorgó a la Comisión las siguientes funciones y facultades (Artículo 9):

- a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
- b) Formular recomendaciones en caso de que lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados Miembros en general, para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro de sus legislaciones internas y tomen, de acuerdo con sus preceptos constitucionales, medidas apropiadas para fomentar la fiel observancia de esos derechos;
- c) Preparar los estudios e informes que considere convenientes en el desempeño de sus funciones;
- d) Encarecer a los Gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen informaciones sobre las medidas que adopten en el orden de los derechos humanos;
- e) Servir de cuerpo consultivo de la Organización de los Estados Americanos en materia de derechos humanos.

La única limitación a las facultades y atribuciones antes enumeradas se halla contenida en el Artículo 10 del Estatuto, el cual dispone que "en el cumplimiento de su mandato, la Comisión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Carta de la Organización y tendrá singularmente presente que, conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático".

En su Primer Período de Sesiones (3 al 28 de octubre de 1960) la Comisión estudió el alcance de las facultades consignadas en el Artículo 9 de su Estatuto a fin de determinar debidamente su competencia.³

En lo referente a los acápites a), c), d)), y e) del mencionado Artículo 9 la Comisión estimó que la esfera de su competencia estaba claramente establecida, pero no así respecto del acápite b) del aludido Artículo.

Después de considerar detenidamente dicho acápite, la Comisión acordó que el Artículo 9 (b) de su Estatuto la facultaba para "formular recomendaciones generales tanto a todos los Estados miembros, como a cada uno de ellos", para que "adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro de sus legislaciones internas y tomen, de acuerdo con sus preceptos constitucionales, medidas apropiadas para fomentar la fiel observancia de esos derechos".

La interpretación dada al acápite b) del Artículo 9 del Estatuto, junto con las demás facultades claramente establecidas en el propio Artículo, especialmente la de

As of December 31, 1967, the Secretariat of the Commission was composed of the following persons:

Dr. Luis Reque, Executive Secretary;
Dr. Guillermo Cabrera, Staff Official;
Dr. Alvaro Gómez, Staff Official;
Dr. Robert Johnston, Staff Official.

C. COMPETENCE

The Statute approved by the Council of the Organization in 1960 assigned the following functions and powers to the Commission (Article 9):

- a) To develop an awareness of human rights among the peoples of America;
- b) To make recommendations to the Governments of the member states in general, if it considers such action advisable, for the adoption of progressive measures in favor of human rights within the framework of their domestic legislation and, in accordance with their constitutional precepts, appropriate measures to further the faithful observance of those rights;
- c) To prepare such studies or reports as it considers advisable in the performance of its duties;
- d) To urge the Governments of the member states to supply it with information on the measures adopted by them in matters of human rights;
- e) To serve the Organization of American States as an advisory body in respect of human rights.

The only limitation on the above functions and powers is contained in Article 10 of the Statute, which provides that "in performing its assignment, the Commission shall act in accordance with the pertinent provisions of the Charter of the Organization and bear in mind particularly that, in conformity with the American Declaration of the Rights and Duties of Man, the rights of each man are limited by the rights of others, by the security of all, and by the just demands of the general welfare and the advancement of democracy."

In its First Session (October 3 to 28, 1960) the Commission considered the extent of the powers assigned in Article 9 of its Statute in order to make a due determination of its competence.³

With regard to sections a), c), d) and e) of Article 9, the Commission deemed the sphere of its competence clearly established, however not so with respect to section b) thereof.

After thoroughly considering all aspects of several interpretations of that section, the Commission ruled that Article 9 (b) of the Statute empowered it "to make general recommendations to each individual member state, as well as to all of them," so that "they may adopt progressive measures in favor of human rights within the framework of their domestic legislation, and that they take, in accordance with their constitutional precepts, appropriate measures to further the faithful observance of those rights."

The interpretation accorded to section b) of Article 9 of the Statute, together with the rest of the powers clearly established in the same Article, especially those in sections c) and d), and likewise in Article 11 c), specifically established the competence of the

³ OEA/Ser./L/V/II.1 Doc. 32, 14 marzo 1961.

³ OEA/Ser.L/V/II. 1 Doc. 32, March 14, 1961.

los acápites c) y d), así como la del Artículo 11 c) estableció firmemente la competencia de la Comisión para examinar la situación de los derechos humanos en los países americanos donde se produjeran violaciones flagrantes y reiteradas de esos derechos; para solicitar de los Gobiernos respectivos las informaciones del caso y, cuando lo estimare conveniente, la anuencia para trasladarse a su territorio; para formular las recomendaciones convenientes y, finalmente, para preparar los informes del caso.

Otro punto estrechamente relacionado con la cuestión de la competencia de la Comisión fue el relativo a las comunicaciones o reclamaciones. Concretamente, la Comisión estudió si de acuerdo con su Estatuto estaba facultada para tomar una decisión individual sobre las comunicaciones o reclamaciones que le fueran dirigidas a propósito de violaciones de los derechos humanos en países americanos. Respecto de este punto la Comisión declaró, en una resolución aprobada en el primer período de sesiones, que no estaba facultada, conforme a su Estatuto, para tomar ninguna decisión individual respecto de dichas comunicaciones o reclamaciones.

Sin embargo, la Comisión, teniendo en cuenta que la consideración de las comunicaciones constituía una fuente valiosa para conocer la situación de los derechos humanos en los diferentes países americanos, declaró que las comunicaciones que recibiera las consideraría a título informativo para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, especialmente en aplicación de los acápites b) y c) de su Estatuto.

Como se señala al principio la facultad de la Comisión para tomar decisiones individuales respecto de las comunicaciones fue modificada por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria (noviembre 1965), al autorizarla esta Conferencia, mediante su Resolución XXII, para examinar las denuncias que recibiera.

La Comisión, de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas en su Estatuto ha desarrollado tres clases de actividades: a) examen de la situación de los derechos humanos en los países americanos b) consideración de las comunicaciones o reclamaciones para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, y c) preparación de estudios e informes y desarrollo de otras actividades con el fin de estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América.

D. ACTIVIDADES

A continuación se ofrece una relación de las actividades de la Comisión:

1. EXAMEN DE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PAISES AMERICANOS

a) Cuba

La situación de los derechos humanos en Cuba fue denunciada ante la Comisión en numerosas comunicaciones, en las que se alegaban reiteradas y graves violaciones de los derechos fundamentales de la persona humana.

La Comisión solicitó repetidas veces del Gobierno cubano las informaciones pertinentes sobre los hechos denunciados, sin que éstas fueran suministradas. El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en nota de 9 de septiembre de 1961, dirigida a la Comisión, ofreció proporcionar a ésta la legislación dictada por el Gobierno Revolucionario en materia de derechos humanos. Este ofrecimiento, reiterado por el propio Ministro de Relaciones Exteriores el 17 del mismo mes, nunca llegó a materializarse.⁴

⁴ OEA/Ser.L/V/II.4 Doc. 30, 1 mayo 1962.

Commission to examine the situation of human rights in the countries of America where flagrant and repeated violations of those rights were occurring; to request pertinent information of the Governments concerned, and, on deeming it necessary, to request the consent thereof to move to their territory; to make the recommendations thought advisable, and finally, to prepare appropriate reports.

Another point closely related to the matter of the extent of the Commission's powers was that of communications or complaints. Specifically, the Commission considered whether under its Statute it was empowered to make individual decisions on communications or claims addressed to it on the subject of violations of human rights in American countries. On this point, in a resolution passed during the First Session, the Commission declared that under its Statute it was not empowered to make any individual decision respecting such communications or claims. Nevertheless, the Commission, taking into account that the consideration of communications constituted an important source of knowledge of the situation of human rights in the various American countries, declared that it would take cognizance of the communications it might receive, by way of information, for the most effective fulfillment of its functions, especially for the application of sections b) and c) of Article 9 of the Statute.

As indicated earlier, the Commission's power to make individual decisions respecting communications was modified by the Second Special Inter-American Conference (November, 1965), in that this Conference authorized the Commission to examine denunciations received by it.

In accordance with the powers conferred on it by its Statute, the Inter-American Commission on Human Rights has developed three classes of activities: a) examination of the situation of human rights in the American countries; b) study of communications or complaints for the most effective fulfillment of its function; and c) preparation of studies and reports together with the carrying forward of other activities for the purpose of promoting the awareness of human rights among the American peoples.

D. ACTIVITIES

There follows below an account of the Commission's activities:

1. Examination of the Situation of Human Rights in American Countries

a) Cuba

The situation of human rights in Cuba was indicted before the Commission in numerous communications, in which were charged repeated and serious violations of the fundamental rights of the individual.

The Commission several times requested of the Cuban Government information pertinent to the facts denounced, but it was not provided. The Minister of Foreign Relations of Cuba, in a note of September 9, 1961 addressed to the Commission, offered to furnish it with the legislation promulgated by the Revolutionary Government in the field of human rights. This offer, reiterated by the Minister of Foreign Relations himself on the 17th of that month, never came to be fulfilled.⁴

Faced with the silence of the Cuban authorities and in view of the denunciations received, the Commission published, in May, 1962, the document entitled "Report on the Situation of Human Rights in the Republic of Cuba".⁵ In this report appeared a

⁴ OEA/Ser.L/V/II.4, Doc. 30, May 1, 1962.

⁵ Ibid.

Ante el silencio de las autoridades cubanas y atendiendo a las denuncias recibidas, la Comisión publicó, en mayo de 1962, el documento titulado "Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Cuba."⁵

En el mismo se transcribía la nota de 7 de noviembre de 1961, dirigida al Gobierno cubano, la que contenía un resumen de las denuncias más urgentes y señalaba las contradicciones entre las leyes vigentes en ese país con sus propias normas constitucionales y con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La Comisión expresó en este Informe que si bien no ignoraba la existencia de un régimen revolucionario que "ha tenido que transformar un régimen anterior", no era menos cierto que las medidas que venía adoptando deberían ser consideradas como procedentes "de un Gobierno obligado al cumplimiento de los compromisos legalmente contraídos en el campo internacional para la dignificación de la persona humana".

En dicho Informe, además, se recomendaba al Gobierno de Cuba que adoptara dentro de su legislación interna "medidas progresivas en favor de los derechos humanos".

El conocimiento de nuevas denuncias que señalaban reiteradas y flagrantes violaciones de los derechos humanos en Cuba, motivó que la Comisión, en uso de la facultad que le concede el Artículo 11, inciso c) de su Estatuto, solicitara de las autoridades respectivas la anuencia previa para efectuar una visita al territorio cubano y observar directamente la situación de los derechos humanos en ese país. Esta solicitud, reiterada posteriormente, no recibió contestación de parte del Gobierno de Cuba.

En vista de este hecho, fue necesario que la Comisión obtuviera, de fuentes directas y por propia iniciativa, aquellas informaciones indispensables para formarse un criterio adecuado de la situación de los derechos humanos en Cuba. Durante el primer período extraordinario de sesiones (enero 1963), la Comisión trasladó temporalmente su sede a la ciudad de Miami, Florida, para recibir el testimonio de personas que habían cumplido penas carcelarias en las prisiones de Cuba. En Mayo de 1963, publicó su "Informe sobre la situación de los presos políticos y sus familiares en Cuba"⁶

El documento presenta casos concretos de muertes violentas, torturas y maltratos en las prisiones políticas cubanas, avalados por testigos que padecieron o presenciaron esos hechos, así como por familiares de los presos, afectados por los hechos denunciados.

En este Informe reiteró la Comisión el derecho que le asiste para solicitar del Gobierno cubano las informaciones pertinentes sobre los hechos puestos en su conocimiento, indicando que al hacerlo seguía "estrictamente las facultades que le otorgaba el Estatuto, y las cuales fueron conocidas y aprobadas plena y conscientemente por el Gobierno cubano en el seno del Consejo de la Organización".

De acuerdo con ese criterio, la Comisión prosiguió transmitiendo a las autoridades cubanas, en solicitud de información, las denuncias que le fueron dirigidas a partir de 1963 y en las cuales se relataban violaciones graves de los derechos humanos fundamentales. En vista de que el Gobierno de Cuba no dio respuesta a las solicitudes de información y a los pedidos de anuencia para trasladarse a su territorio con el objeto de examinar la situación de los derechos humanos, la Comisión decidió, en abril de 1967, poner en conocimiento de los Gobiernos americanos, por conducto del Consejo de la

⁵ *Ibid.*

⁶ OEA/Ser.L/V/II.7 Doc. 4, 17 mayo 1963.

transcription of the note of November 7, 1961, addressed to the Cuban Government, which contained a summary of the most urgent denunciations and noted the contradictions between the laws in force in that country and its own constitutional standards and between such laws and the American Declaration of the Rights and Duties of Man.

The Commission expressed in this Report that although it was not ignoring the existence of a revolutionary regime that "has had to transform the previous regime," it was nonetheless clear that "the governmental measure it was adopting should be considered as acts of a government bound to fulfill those obligations legally contracted in the international field, for the dignity of man."

In addition, in this Report the recommendation was made to the Government of Cuba that it act to adopt in its domestic legislation "progressive measures in favor of human rights."

The knowledge of further denunciations pointing to repeated and flagrant violations of human rights in Cuba moved the Commission, in application of the power granted under section c) of Article 11 of its Statute, to request of the appropriate authorities their prior consent in order to make a visit to the territory of Cuba and observe at first hand the situation of human rights in that country. This request, later repeated, received no answer on the part of the Government of Cuba.

In view of this, it was necessary for the Commission to obtain, from direct sources and upon its own initiative, such information as was indispensable for the formation of an adequate assessment of the situation of human rights in Cuba. During its First Special Session (January, 1963), the Commission temporarily transferred its seat to the city of Miami, Florida, to take the testimony of persons who had served prison terms in the prisons of Cuba. In May 1963, it published the "Report on the Situation of Political Prisoners and their Relatives in Cuba".⁶

This document includes specific cases of violent deaths, torture and maltreatment in the Cuban political prisons, verified by witnesses who suffered or were present during the events, and likewise by the prisoners' relatives who were affected by the events testified to.

In this Report the Commission reiterated its right to request of the Cuban Government all information relevant to the events brought to its attention, stating that in doing so it was "strictly adhering to the powers vested in it by its Statute, which were known to and approved by the Government of Cuba, fully and consciously, in the Council of the OAS."

Following this assessment, the Commission continued transmitting to the Cuban authorities, by way of requesting information, the denunciations addressed to it from 1963 onwards, in which were reported serious violations of fundamental human rights. In view of the fact that the Government of Cuba gave no response to the requests for information and to those for permission to visit the territory of Cuba with the object of examining the situation of human rights, the Commission decided, in April, 1967, to bring to the attention of the American Governments, by transmittal through the Council of the Organization, the document entitled "Report Regarding the Situation of Human Rights in Cuba"⁷ in which it observed that the overwhelming majority of the denunciations brought to its attention referred to violations of the fundamental rights

⁶ OEA/Ser.L/V/II.7 Doc. 4, May 17, 1963.

⁷ OEA/Ser.L/V/II.17 Doc. 4, Rev., April 27, 1967.

Organización, el documento titulado "Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba" ⁷ en el que observó que la casi totalidad de las denuncias elevadas a su conocimiento se referían a violaciones de los derechos fundamentales de la persona humana, tales como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, así como el derecho de igualdad ante la ley, el de protección contra la detención arbitraria, el derecho a proceso regular y el de justicia, todos ellos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

b) *Haití*

A partir de su Segundo Período de Sesiones (abril 1961), la Comisión transmitió varias notas al Gobierno de Haití, en solicitud de informaciones sobre los casos denunciados, acompañando las partes pertinentes de las denuncias recibidas.

El Gobierno de Haití, si bien respondió a las notas dirigidas por la Comisión, no suministró en todos los casos las informaciones solicitadas, lo cual determinó que la Comisión, el 26 de septiembre de 1962, solicitara la anuencia para celebrar parte de su período de sesiones en territorio haitiano.⁸

El Gobierno haitiano al negarle a la Comisión la solicitud de anuencia manifestó que la visita podría considerarse como una forma de intervención en los asuntos internos de su país. Por su parte la Comisión señaló concretamente que la facultad de trasladarse al territorio de un Estado americano estaba determinada en el Artículo 11, inciso c) del Estatuto; que al solicitar la anuencia no tenía otro propósito que el de examinar con espíritu imparcial y de alta responsabilidad, la situación de los derechos humanos en ese país, y por último, que la interpretación dada por el Gobierno haitiano a la solicitud de anuencia, en el sentido de que la visita podría afectar su soberanía, estaba en contradicción con la posición de dicho país cuando se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, y cuando se aprobó el Estatuto de la Comisión, pues, en ambas oportunidades, Haití había votado afirmativamente.⁹

En vista de haber recibido informaciones sobre reiteradas violaciones de los derechos humanos ocurridas en territorio haitiano, la Comisión nuevamente solicitó del Gobierno haitiano, el 7 de mayo de 1963, la anuencia correspondiente para visitar su territorio.¹⁰ Como el Gobierno haitiano volvió a negar dicha solicitud, la Comisión acordó poner en conocimiento del Consejo de la Organización su profunda preocupación respecto de la situación de los derechos humanos en Haití, así como la negativa del gobierno de ese país para que la Comisión pudiera examinar en el propio terreno las denuncias que había recibido sobre graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos. En octubre de 1963, la Comisión puso en conocimiento de los Gobiernos miembros de la Organización el informe titulado "Situación de los Derechos Humanos en Haití."¹¹

En su Décimosexto Período de Sesiones, celebrado en Viña del Mar (Chile), abril-mayo 1967, la Comisión acordó dar a publicidad otro documento relacionado con la situación de los derechos humanos en Haití, titulado "Solicitudes de Información trans-

of the human being, such as the rights of life, liberty and personal security; equality before the law; protection from arbitrary arrest; due process of law; and the right to a fair trial, all of them set forth in the American Declaration of the Rights and Duties of Man.

b) *Haiti*

Beginning with its Second Session (April, 1961), the Commission transmitted several notes to the Government of Haiti, requesting information about the cases reported and forwarding the pertinent parts of the denunciations that had been received.

Although it answered the notes addressed by the Commission, the Government of Haiti failed to furnish in all cases the information requested. This led the Commission, on September 26, 1962, to request permission to hold part of its regular Session on Haitian territory.⁸

Denying the Commission's request for such permission, the Haitian Government stated that a visit might be considered a form of intervention in the internal affairs of that country. For its own part, the Commission specifically noted that the power to visit the territory of an American State was determined by Article 11, section c) of the Statute; that in requesting such consent it had no other purpose save that of examining, in a spirit of impartiality and of high responsibility, the situation of human rights in that country, and, finally, that the interpretation put by the Haitian Government upon the request for permission, to the effect that a visit might affect its sovereignty, was contrary to that country's position at the time of the creation of the Inter-American Commission on Human Rights in the Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs and at the time of the approval of the Statute of the Commission, since on both occasions Haiti voted in favor.⁹

In view of having received information concerning repeated violations of human rights taking place on Haitian territory, the Commission once again requested of the Haitian Government, on May 7, 1963, the necessary permission to visit its territory.¹⁰ Since the Haitian Government again turned down this request, the Commission agreed to bring to the attention of the Council of the Organization its deep concern for the situation of human rights in Haiti, as well as for the refusal of the government of that country that the Commission might examine on the scene the denunciations that it had received of serious and repeated violations of human rights. In October, 1963, the Commission brought to the attention of the Member Governments of the Organization the report entitled "Report Regarding the Situation of Human Rights in Haiti".¹¹

In its Sixteenth Session, held in Viña del Mar, Chile, during April and May, 1967, the Commission decided to publish another document relating to the situation of human rights in Haiti, entitled "Requests for Information transmitted to the Government of Haiti on the case of the Citizens returned to their Country from the Dominican Republic and the Case of the Beauvoir-Florez Family"¹² This document contains an account of the steps undertaken by the Commission with the Government of Haiti for the purpose of learning the whereabouts of numerous Haitian citizens who were re-

⁷ OEA/Ser.L/V/II.7 Doc. 4 Rev., 27 abril 1967.

⁸ OEA/Ser.L/V/II.5 Doc. 40, 11 febrero 1963 p. 9.

⁹ Ibid p. 11

¹⁰ OEA/Ser.L/V/II.7 Doc. 28, 15 agosto 1963 p. 14.

¹¹ OEA/Ser.L/V/II.8 Doc. 35, 5 febrero 1964 p. 14.

⁸ OEA/Ser.L/V/II.5 Doc. 40, February 11, 1963, p. 9.

⁹ Id., p. 11.

¹⁰ OEA/Ser.L/V/II.7 Doc. 28, August 15, 1963, p. 14

¹¹ OEA/Ser.L/V/II.8 Doc. 35, February 5, 1964, p. 14.

¹² OEA/Ser.L/V/II.16 Doc. 2 Rev., February 16, 1967

mitidas al Gobierno de Haití, sobre el caso de los ciudadanos haitianos devueltos a su país desde la República Dominicana y el caso de la familia Beauvoir-Florez".¹² Este documento contiene una relación de las gestiones realizadas por la Comisión ante el Gobierno de Haití con el objeto de conocer el paradero de numerosos ciudadanos haitianos que fueron devueltos desde la República Dominicana al territorio de Haití, en abril y mayo de 1966 y de las persistentes negativas del Gobierno de ese país para proporcionar a la Comisión las informaciones solicitadas.

En lo que respecta al caso de la familia Beauvoir-Florez, el documento contiene también las gestiones realizadas por la Comisión para impedir que las autoridades haitianas ejecutaran a la señora María Teresa Beauvoir y a su primo, el señor Emmanuel Beauvoir, quienes, de acuerdo con las informaciones recibidas, habían sido condenados a la pena de muerte por un tribunal militar. El Gobierno de Haití informó a la Comisión que la señora Beauvoir-Florez y el señor Beauvoir habían sido indultados.

c) República Dominicana

La Comisión no sólo tomó conocimiento de las numerosas comunicaciones que recibió denunciando flagrantes violaciones de los derechos humanos en la República Dominicana, sino que realizó, a iniciativa propia y con la anuencia del Gobierno de ese país, una visita al territorio dominicano con el objeto de examinar en el propio terreno la situación de los derechos humanos.¹³ Al término de su visita (22 a 28 de octubre de 1961), la Comisión, en nota de 8 de noviembre de 1961, formuló algunas recomendaciones al Gobierno dominicano para que diera plena vigencia a varios derechos fundamentales de la persona humana (Artículos I, IV, XIII, XXI, XXII, y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). En abril de 1962, la Comisión publicó un documento titulado "Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana"¹⁴ el cual contiene una relación de las actividades que realizó sobre este caso. En sus observaciones finales, la Comisión afirmó que las violaciones más flagrantes de los derechos humanos en la República Dominicana se perpetraron durante el régimen dominado por el Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, señalando que, si bien mejoró la situación de los derechos humanos desde el 1° de julio de 1961, continuaron produciéndose violaciones graves tales como las indicadas en el propio Informe y en la nota de 8 de noviembre de 1961.

La Comisión visitó nuevamente la República Dominicana, en mayo de 1963, esta vez por invitación del Gobierno de ese país, para examinar una denuncia por alegadas violaciones de los derechos de libertad de expresión y de protección contra la detención arbitraria, formulada por los dirigentes de varios partidos políticos. Al cabo de su visita la Comisión, en nota de 20 de mayo de 1963, manifestó al Gobierno dominicano que se abstenía de calificar los hechos denunciados, por cuanto el esclarecimiento de los mismos correspondía a la administración de justicia de la República Dominicana y además porque las autoridades judiciales de ese país habían asegurado que la investigación de tales hechos se encontraba en la etapa sumaria del procedimiento judicial.¹⁵

A raíz de la Revolución del 24 de abril de 1965, los dos Gobiernos que surgieron en la República Dominicana, el de Reconstrucción Nacional y el Constitucional,

turned from the Dominican Republic to the territory of Haiti on April and May, 1966, and the persistent refusals of the Government of that country to furnish the Commission with the requested information.

Regarding the case of the Beauvoir-Florez family, the document also describes the steps taken by the Commission to forestall the execution by the Haitian authorities of Mme. María Teresa Beauvoir and her cousin, Mr. Emmanuel Beauvoir, who, according to information made available, had been condemned to death by a court-martial. The Government of Haiti informed the Commission that Mme. Beauvoir-Florez and Mr. Beauvoir had been pardoned.

c) Dominican Republic

The Commission not only took cognizance of the large number of communications that it received charging flagrant violations of human rights in the Dominican Republic, but also, on its own initiative and with the consent of the Government of that country, undertook a visit to Dominican territory for the purpose of examining at first hand the situation of human rights there.¹³ At the end of its visit (October 22 to 28, 1961), the Commission, in a note of November 8, 1961, made several recommendations to the Dominican Government to the effect that it give full force and effect to certain of the essential rights of the individual (Articles I, IV, XIII, XXI, XXII and XXV of the American Declaration of the Rights and Duties of Man). In April, 1962, the Commission published a document entitled "Report on the Situation Regarding Human Rights in the Dominican Republic"¹⁴ which contains an account of the actions undertaken in this case. In its closing observations, the Commission affirmed that the most flagrant violations of human right in the Dominican Republic were perpetrated during the regime dominated by Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, at the same time indicating that although the situation of human rights had improved since July 1, 1961, there continued to take place serious violations such as those set out in the report itself and in the note of November 8, 1961.

The Commission visited the Dominican Republic anew in May, 1963, this time by invitation of the Government of that country, to examine a denunciation of supposed violations of the rights of freedom of expression and of protection against arbitrary arrest, made by the leaders of various political parties. At the end of its visit, the Commission, in a note of May 20, 1963, indicated to the Dominican Government that it was refraining from passing any judgment on the events denounced, since the elucidation of the same was properly the province of the administration of justice in the Dominican Republic and, further, because the judicial authorities of that country had given assurances that an investigation of the events was even then at the pre-trial stage of criminal proceedings.¹⁵

At the outbreak of the revolution of April 24, 1965, the two governments extant in the Dominican Republic, the Government of National Reconstruction and the Constitutional Government, demanded the presence of the Commission, the performance of which in the two previous visits had established a favorable precedent for its new activities.

For his part, the Secretary General of the Organization, Dr. José A. Mora, in a cablegram of May 25, 1965, sent from Santo Domingo to the Chairman of the Tenth

¹² OEA/Ser.L/V/II.16 Doc. 2, Rev., 16 febrero 1967.

¹³ OEA/Ser.L/V/II.3 Doc. 32, 4 noviembre 1961 pp. 4-7.

¹⁴ OEA/Ser.L/V/II.4 Doc. 32, 3 mayo 1962.

¹⁵ OEA/Ser.L/V/II.7 Doc. 28, 15 agosto 1963 p. 19.

¹³ OEA/Ser.L/V/II.3 Doc. 32, November 4, 1961, pp. 4-7

¹⁴ OEA/Ser.L/V/II.4 Doc. 32, May 3, 1962.

¹⁵ OEA/Ser.L/V/II.7 Doc. 28, August 15, 1963, p. 19

reclamaron la presencia de la Comisión. La actuación del Organismo, en las dos visitas anteriores, había sentado un precedente favorable para sus nuevas actividades.

Por su parte, el Secretario General de la Organización, Dr. José A. Mora, en cablegrama del 25 mayo de 1965, enviado desde Santo Domingo al Presidente de la Décima Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores, declaró que consideraba indispensable y urgente la presencia de la Comisión en la República Dominicana.¹⁶

La autorización requerida para su presencia, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto, quedó establecida en dos documentos, suscritos por el Presidente y altas autoridades de cada uno de los Gobiernos en pugna, en virtud de los cuales ambos Gobiernos se comprometieron a respetar y mantener en vigencia los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y a prestar a la Comisión "todas las facilidades indispensables para el desempeño de su misión."¹⁷

Sin embargo, el fundamento para su actuación quedó firmemente determinado en la Resolución aprobada en el Undécimo Período de Sesiones, celebrado con carácter extraordinario en julio de 1965, en la cual se autorizó al Presidente "para que, de acuerdo con sus facultades y en la forma en que lo estime más adecuado, mantenga una representación de la Comisión en la República Dominicana con el objeto de que la misma continúe atendiendo los problemas relacionados con los derechos humanos en dicho país durante la presente situación".¹⁸

También se autorizó al Presidente, en el mismo período de sesiones, para que continuase representando a la Comisión una vez instalado el Gobierno Provisional siempre que dicho Gobierno, de acuerdo con el Acto Institucional, autorizase la presencia del Organismo en su territorio.¹⁹

Este acuerdo fue confirmado en el Duodécimo Período de Sesiones (octubre de 1965). En vista de la invitación que le formulara el Gobierno Provisional el 27 de septiembre de ese año en virtud de lo dispuesto en el Artículo 51 del Acto Institucional, la Comisión aceptó continuar su labor en la República Dominicana y mantener sus oficinas en la Capital de ese país. Asimismo señaló en dicho acuerdo que, en el cumplimiento de sus funciones, mantendría el respeto debido a la personalidad, soberanía e independencia del Estado dominicano.²⁰

Desde su llegada a Santo Domingo, el 31 de mayo de 1965, la Comisión tuvo que concentrar sus esfuerzos en la protección del derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de las personas, por ser éstos los derechos más afectados y amenazados. La mayoría de las infracciones denunciadas se relacionaban precisamente con esos derechos, incluso los casos de tratamiento cruel e inhumano, de detenciones y encarcelamientos arbitrarios e ilegales y de atentados contra la inviolabilidad del domicilio. Por otra parte, prestó toda la atención que pudo a las reclamaciones que recibió por infracciones de los derechos de reunión, libertad de opinión y expresión, de residencia y tránsito.

¹⁶ OEA/Ser.L/V/II.13 Doc. 14, Rev. 15 octubre 1965 p. 2.

¹⁷ Ibid. p. 4.

¹⁸ OEA/Ser.L/V/II.12 Doc. 10, 20 septiembre 1965 p. 11.

¹⁹ Ibid. p. 13.

²⁰ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 6 Rev., 28 octubre 1966 p. 2.

Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, stated that he considered the presence of the Commission in the Dominican Republic to be urgent and indispensable.¹⁶

The necessary authorization for the Commission's presence there, in accord with the provisions of its Statute, rested in two documents signed by the President of each of the two opposing governments and by high officials thereof, by virtue of which both Governments engaged to respect and maintain in force the human rights sanctioned in the American Declaration of the Rights and Duties of Man, and to make available to the Commission "all facilities necessary to the conduct of its mission."¹⁷

Nevertheless, the basis for its operations was firmly settled by the Resolution approved at the Eleventh Session (Special), held in July, 1965, in which the Chairman was authorized "in accordance with his powers and in the way that he considers most appropriate, to maintain a representation of the Commission in the Dominican Republic, in order that this body may continue dealing with problems related to human rights in that country during the present situation."¹⁸

Further, the Chairman, at the same Session, was authorized to continue representing the Commission once the Provisional Government was established, provided that said Government, in accordance with the Institutional Act, authorized the presence of the Commission in its territory.¹⁹

This decision was confirmed at the Twelfth Session (October, 1965). In view of the invitation extended by the Provisional Government on September 27 of that year by virtue of the provisions of Article 51 of the Institutional Act, the Commission agreed to continue its work in the Dominican Republic and to maintain its offices in the capital of that country. At the same time, it pointed out in that agreement that in the performance of its functions it would maintain the respect due to the personality, sovereignty and independence of the Dominican State.²⁰

From its arrival in Santo Domingo on May 31, 1965, the Commission had to concentrate its efforts on the protection of the right to life, liberty, and personal security, these being the rights most affected and threatened. The majority of the infringements of rights charged dealt precisely with those rights, including cases of cruel and inhumane treatment, arbitrary and illegal arrests and imprisonment, and violations of the privacy of the home. On the other hand, the Commission paid every possible attention to complaints received of infringements of the rights of assembly, freedom of opinion and expression, and of freedom of residence and movement.

The Commission observed, further, that the prison situation was very serious, because of the practice of mass arrests associated with the early days of the revolution. Numerous denunciations were received of arbitrary executions, as well as of numerous cases of disappearances. The Commission continually visited all prisons in the Santo Domingo Zone and the majority of those in the interior. It took energetic measures to obtain the release of prisoners against whom charges had not been placed, in reference to whom no statements or affidavits had been taken, or who had not been tried; and also to improve the food and sanitary and medical conditions. In its visits to the prisons,

¹⁶ OEA/Ser.L/V/II.13 Doc. 14 Rev., October 15, 1965, p. 2

¹⁷ Ibid. p. 4

¹⁸ OEA/Ser.L/V/II.12 Doc. 10, September 20, 1965, p. 11.

¹⁹ Id., p. 13.

²⁰ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 6 Rev., October 28, 1966, p. 2.

La Comisión observó además, que era muy grave la situación en las cárceles, a causa de los arrestos en masa practicados en los primeros días de la Revolución. Se recibieron múltiples denuncias por ejecuciones arbitrarias, así como por numerosos casos de personas desaparecidas. La Comisión visitó constantemente todas las prisiones de la zona de Santo Domingo y la mayoría de las del interior. Hizo intensas gestiones para obtener la libertad de los prisioneros a quienes no se les había formulado cargos, tomado declaración o seguido juicio y para mejorar los alimentos y las condiciones sanitarias y médicas. En sus visitas a las cárceles, la Comisión entrevistó presos, verificó las listas de los encarcelados, se interesó por el paradero de personas desaparecidas e inspeccionó las celdas y las prisiones.

La Comisión recomendó a las autoridades que garantizaran el respeto de los derechos humanos hasta donde fuera posible, en medio de esa situación perturbada y anormal, y reprimieran y castigaran los excesos y las infracciones de los agentes gubernamentales.²¹

Al tomar posesión el Gobierno Provisional (septiembre de 1965), la Comisión había tramitado más de 1,500 reclamaciones de personas encarceladas por motivos políticos y más de 200 denuncias concretas que afectaban, directa o indirectamente, el derecho a la vida. En la víspera de la instalación de dicho Gobierno, la Comisión logró la libertad de todos los presos políticos que quedaban en las cárceles dominicanas.

La labor de la Comisión durante su primera etapa quedó relacionada en el documento titulado: "Informe sobre la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la República Dominicana entre el 1° de junio hasta el 31 de agosto de 1965",²²

Durante la etapa presidida por el Gobierno Provisional, la Comisión continuó su labor de velar por la observancia de los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente aquellos citados en el Acto Institucional, haciendo hincapié en todo cuanto afectara el proceso electoral en marcha. La Comisión celebró una reunión en la Capital dominicana entre el 29 de mayo y el 3 de junio de ese año, facilitando así la observancia de los derechos humanos durante las elecciones del 1° de junio de 1966. Dejó constancia de no haber recibido en esa oportunidad denuncia alguna sobre violaciones de los referidos derechos.²³

La Comisión dio por concluida su misión el 6 de julio de 1966, publicando al efecto el documento titulado "Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su actuación en la República Dominicana del 1° de septiembre de 1965 al 6 de julio de 1966".²⁴

d) OTROS PAISES AMERICANOS

También fue objeto de estudio la situación de los derechos humanos en el Paraguay, como resultado de haberse recibido denuncias en que se alegaban reiteradas violaciones de los derechos humanos. En todos los casos, las autoridades paraguayas suministraron las informaciones solicitadas.

En marzo de 1965, y con el fin de iniciar el examen respecto de la situación de los

the Commission interviewed prisoners, checked prisoners' rolls, concerned itself with the whereabouts of missing persons, and inspected the cells and the prisons generally.

The Commission recommended that the authorities guarantee respect for human rights so far as possible in what was a disturbed and abnormal situation, and that they repress and punish excesses and infractions of duty on the part of government agents.²¹

At the time the Provisional Government assumed power (September, 1965), the Commission had handled more than 1,500 complaints of persons imprisoned for political reasons and more than 200 specific charges affecting, directly or indirectly, the right to life. On the eve of the inauguration of that Government, the Commission succeeded in obtaining the release of all the political prisoners remaining in Dominican jails.

The work of the Commission during the first stage of its operation was recounted in the document entitled, "Report on the Activities of the Inter-American Commission on Human Rights in the Dominican Republic (June 1 to August 31, 1965)."²²

During the interim presided over by the Provisional Government, the Commission continued its work of watching over the observance of the basic rights of the individual, especially those cited in the Institutional Act, taking a firm stand respecting all that might affect the ongoing progress of the electoral process. The Commission held meetings in the Dominican capital between May 29 and June 3 of that year, by that means facilitating the observance of human rights during the elections of June 1, 1966. It certified that on that occasion it had received no report of violations of rights.²³

The Commission brought its mission to a close on July 6, 1966, publishing on that subject the document entitled "Report of the Inter-American Commission on Human Rights on its Activities in the Dominican Republic (September 1, 1965, to July 6, 1966)."²⁴

d) OTHER AMERICAN COUNTRIES

The situation of human rights in Paraguay was likewise an object of study by the Commission, as a result of its having received denunciations alleging repeated violations of human rights. In all cases, the Paraguayan authorities furnished the information requested.

In March, 1965, for the purpose of opening an examination of the situation of human rights in that country, the Commission authorized the Chairman and the Executive Secretary to visit the territory of Paraguay.²⁵ The visit, at the consent of the Government concerned, took place in August of that year. On that occasion the representatives of the Commission held at Asunción interviews with high officials of the nation, with representatives of opposition groups and with private individuals.

At the end of his visit, the Chairman of the Commission filed his report, classified reserved for official use only, including therein several recommendations à propos.²⁶

Similarly, the situation of human rights in Guatemala was an object of concern to the Commission, taking account of the many denunciations received beginning in 1963.

²¹ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 6 Rev., 28 octubre 1966 p. 12.

²² OEA/Ser.L/V/II.13 Doc. 14, Rev., 15 octubre 1965.

²³ Ibid. p. 30.

²⁴ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 6 Rev., 28 octubre 1966.

²¹ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 6 Rev., October 28, 1966, p. 12

²² OEA/Ser.L/V/II.13 Doc. 14, Rev., October 15, 1965.

²³ Id., p. 30

²⁴ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 6 Rev., October 28, 1966

²⁵ OEA/Ser.L/V/II.11 Doc. 19, July 2, 1965, p. 10.

²⁶ OEA/Ser.L/V/II.13 Doc. 5, September 30, 1965.

derechos humanos en ese país, la Comisión autorizó al Presidente y al Secretario Ejecutivo del Organismo para visitar el territorio paraguayo.²⁵ La visita, con la anuencia de dicho Gobierno, tuvo lugar en agosto de ese año. En esa oportunidad los Representantes de la Comisión celebraron en Asunción entrevistas con las altas autoridades nacionales, con representantes de sectores de oposición y con personas particulares.

El Presidente de la Comisión, al término de su visita, presentó un informe de carácter reservado, incluyendo algunas recomendaciones al respecto.²⁶

Fue asimismo objeto de estudio la situación de los derechos humanos en Guatemala, teniendo en cuenta las numerosas denuncias recibidas a partir de 1963.

Como hasta el 1° de julio de 1966, fecha en que tomó posesión el nuevo Gobierno de Guatemala, no se habían recibido las informaciones solicitadas del Gobierno anterior respecto de las denuncias recibidas durante los años 1963, 1964, 1965 y principios de 1966, la Comisión acordó publicar las notas enviadas, así como el texto de las denuncias y reclamaciones acompañadas a las mismas, en un documento titulado "Solicitudes de Información transmitidas al Gobierno de Guatemala".²⁷

Con respecto a Nicaragua también recibió la Comisión denuncias y reclamaciones por alegadas violaciones de los derechos humanos, siendo las más apremiantes las que se referían a los derechos que garantizaban el proceso electoral en ese país. El Gobierno nicaragüense suministró las informaciones solicitadas.

Durante el período electoral que culminó en los comicios de febrero de 1963, y en vista de las reclamaciones recibidas, la Comisión solicitó del Gobierno de Nicaragua la anuencia previa para visitar su territorio. Si bien la visita fue autorizada en principio, no se pudo lograr un acuerdo respecto de la fecha, pues la Comisión deseaba visitar Nicaragua antes de las elecciones de la primavera de 1963, a lo cual se opuso el Gobierno de ese país.

La Comisión, en nota de 9 de enero de 1963 dirigida al Gobierno de Nicaragua, expresó que la visita después de celebradas las elecciones, conforme a la sugerencia formulada por el Ministro de Relaciones Exteriores, no coincidiría con el propósito que fuera señalado en la solicitud de anuencia.²⁸

Una situación parecida surgió con ocasión del proceso electoral nicaragüense de 1966-67, durante el cual la Comisión recibió nuevas y apremiantes denuncias contra alegados hechos que afectaban el libre desenvolvimiento de la campaña electoral.

Además de solicitar las informaciones respectivas, la Comisión manifestó al Gobierno de Nicaragua que, dada la urgencia de algunos casos denunciados, estaría dispuesta a trasladarse a dicho país. El Gobierno nicaragüense se limitó a suministrar amplia y documentada información sobre los hechos denunciados, indicando que los casos habían sido presentados ante los tribunales competentes y que oportunamente haría del conocimiento de la Comisión los fallos que pronunciaren.²⁹

A partir del Séptimo Período de Sesiones (octubre de 1963), la Comisión recibió

²⁵ OEA/Ser.L/V/II.11 Doc. 19, 2 julio 1965 p. 10.

²⁶ OEA Ser.L/V/II.13 Doc. 5, 30 septiembre 1965.

²⁷ OEA Ser.L/V/II.15 Doc. 5, 3 agosto 1966.

²⁸ OEA/Ser.L/V/II.6 Doc. 18, 6 mayo 1963 p. 8.

²⁹ OEA/Ser.L/V/II.16 Doc 4, Res., 5 enero 1967.

Since up to July 1, 1966, the date on which the new Government of Guatemala assumed power, the information had not been received that had been requested of the previous Government regarding the denunciations received during the years 1963, 1964, 1965, and the first few months of 1966, the Commission decided to publish the notes sent, including the text of the charges and complaints attached, in a document entitled, "Requests for Information Transmitted to the Government of Guatemala."²⁷

With respect to Nicaragua the Commission likewise received denunciations and complaints of alleged violations of human rights, the most urgent of these being those referring to the rights guaranteeing the electoral process in that country. The Nicaraguan Government furnished the information requested.

During the campaign season leading up to the voting of February, 1963, and in view of the complaints received, the Commission requested the prior consent of the Nicaraguan Government to visit its territory. Although the visit was authorized in principle, it was not possible to arrive at an agreement on the date, since the Commission wished to visit Nicaragua before the elections in the spring of 1963; but the Government of that country was opposed to it.

The Commission, in a note of January 9, 1963, addressed to the Government of Nicaragua, stated that a visit following the holding of elections, as the Ministry of Foreign Relations had suggested, would not coincide with the intention indicated in the request for permission.²⁸

A similar situation arose from the Nicaraguan electoral proceedings of 1966-67 during which the Commission received new and urgent reports of events alleged to be affecting the free conduct of the election campaign.

Besides requesting all relevant information, the Commission informed the Government of Nicaragua that, considering the urgency of some of the cases reported, it would be disposed to move to that country. Confining itself to furnishing ample and documented information concerning the events denounced, the Nicaraguan Government noted that the cases had been entered in the proper courts and that in due course it would bring to the Commission's attention the judgments handed down.²⁹

Beginning with its Seventh Session (October, 1963), the Commission received reports of violations of human rights in Ecuador. The Ecuadorian Government in replying to the requests for information, did not limit itself to furnishing the pertinent data, but beyond that extended to the Commission an invitation to undertake a visit to its territory to be able to observe on the scene the situation of human rights there. However the Commission was not at that time in any position to carry out such a visit.³⁰

In 1965, on the strength of its having received new complaints of acts allegedly derogatory of the essential human rights in a manner implicating the Government of Ecuador, the Commission requested anew all relevant information related to the cases, which was furnished by the corresponding authorities of that country.³¹

There was a similar situation regarding the Republic of Honduras, the Government of which, beyond answering the notes addressed to it by the Commission in request of

²⁷ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 5, August 3, 1966

²⁸ OEA/Ser.L/V/II.6 Doc. 18, May 6, 1963, p. 8.

²⁹ OEA/Ser.L/V/II.10 Doc. 21, February 16, 1965, p. 21.

³⁰ OEA/Ser.L/V/II.9 Doc. 24, August 10, 1964.

³¹ OEA/Ser.L/V/II.10 Doc. 21, February 16, 1965, p. 21

denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en el Ecuador. El Gobierno ecuatoriano, al dar contestación a las solicitudes de información, no se limitó a suministrar los datos pertinentes, sino que extendió una invitación al Organismo para que realizara una visita a su territorio y pudiera observar *in loco* la situación de los derechos humanos en el mismo. La Comisión se vio imposibilitada de efectuar esta visita.³⁰

En 1965, en virtud de haberse recibido nuevas reclamaciones por actos alegadamente atentatorios de los derechos fundamentales del hombre, que hacían referencia al Gobierno del Ecuador, se solicitaron nuevamente las informaciones de rigor, las que fueron suministradas por las autoridades de ese país.³¹

Otro tanto ocurrió con la República de Honduras, cuyo Gobierno, además de contestar las notas dirigidas por la Comisión en solicitud de informaciones sobre denuncias recibidas, extendió una invitación al Organismo, para que destacara representantes y constatará en el terreno la situación de los derechos humanos. También se vio imposibilitada la Comisión, en este caso, de visitar la República de Honduras.³²

2. CONSIDERACION DE LAS COMUNICACIONES O RECLAMACIONES

Definido el alcance de su competencia en lo concerniente a las comunicaciones o reclamaciones, la Comisión estableció, en su Primer Período de Sesiones, un procedimiento para el trámite que daría a las mismas y acordó incorporarlo a su Reglamento bajo un capítulo titulado "Comunicaciones o reclamaciones dirigidas a la Comisión". Este procedimiento puede resumirse en la siguiente forma:

a. En cada período de sesiones la Comisión toma conocimiento de las comunicaciones o reclamaciones recibidas.

b. Si, a juicio de la Comisión, la reclamación se refiere a hechos o situaciones concretos y determinados, se dan a conocer al Gobierno interesado las partes pertinentes de la reclamación. Al mismo tiempo se le solicita la información que estime oportuna.

c. Al transmitirse la reclamación al Gobierno interesado se omite la identidad del autor o autores de la reclamación y cualquier otra información que pueda identificarlos, excepto en los casos en que ellos expresamente lo consientan. Cuando las comunicaciones contienen referencia a varios países, las partes pertinentes de éstas se dan a conocer a los Gobiernos interesados en lo que hace referencia a cada país.

d. Las partes pertinentes de las informaciones suministradas por los Gobiernos son puestas en conocimiento del quejoso o quejosos.

e. La Comisión no da trámite a comunicaciones anónimas, abusivas, insubstanciales o que no tengan pertinencia con acusaciones directas de desconocimiento de derechos humanos en el país o países contra los cuales están dirigidas.

Por otra parte, la Comisión, para complementar sus fuentes de conocimiento, ha establecido la práctica de conceder, a solicitud de personas o grupos, y con estricta limitación, audiencias a fin de que amplíen sus reclamaciones o suministren, sobre bases responsables, datos e informaciones generales sobre la situación de los derechos humanos en uno o varios países americanos.

Este procedimiento fue modificado por la Comisión durante su Décimosexto

³⁰ OEA/Ser.L/II.9 Doc. 24, 10 agosto 1964.

³¹ OEA/Ser.L/V/II.10 Doc. 21, 16 febrero 1965 p. 21.

³² OEA/Ser.L/V/II.8 Doc. 35, febrero 1964 p. 19.

information, extended an invitation to the Commission to post representatives there and verify at first hand the situation of human rights. Once again, the Commission was not in this case in a position to carry out a visit to the Republic of Honduras.³²

2. CONSIDERATION OF COMMUNICATIONS OR CLAIMS

Once it had fixed the scope of its competence as far as communications or claims were concerned, the Commission established, during its First Session, a procedure for the handling it would accord them and agreed to incorporate this into its Regulations under the chapter entitled "Communications or Claims Addressed to the Commission." This procedure may be summarized as follows:

a. Prior to each Session the Secretariat distributes among the Members of the Commission a list of the communications or claims received, together with a brief indication of their contents.

b. If the claim refers to specific and established facts of situations, in the judgment of the Commission, it is brought to the attention of the Government concerned, the pertinent parts of the claim being transmitted to it. At the same time, the information deemed appropriate is requested.

c. In the transmittal of complaints to the Government concerned, the identity of the party or parties making the claim is omitted, as well as any other information that might identify them, save in the cases in which they expressly consent to it. When the communications relate to more than one country, the parts relevant to each country are brought to the attention of the Government concerned therewith.

d. The relevant substance of the information furnished by the Governments is brought to the attention of the complaining party or parties.

e. The Commission does not accord handling to communications that are anonymous, offensive, obviously unfounded or which refer to events or situations that bear no relation to a disregard of human rights by the government against which it is directed.

On the other hand, in order to add to its sources of knowledge, the Commission has established the practice of granting hearings at the request of individuals or groups, and under strict controls, so that they may further substantiate their claims or furnish, on a responsible basis, data and general information on the situation of human rights in one or more American countries.

The Commission modified this procedure during its Sixteenth Session (May, 1967) for the purpose of incorporating therein the power to "examine communications" that had been granted it by the Second Special Inter-American Conference.³³

Between October 3, 1960, the date on which the Commission began its operations, and May 4, 1967, when it approved its revised Regulations, 1525 communications were received, all of which were processed in accordance with the procedure indicated above. In regard to 498 of these, the Commission requested information from the Governments concerned.

Beginning with the Sixteenth Session, the Commission began handling communications under the new Regulations, a procedure dealt with under the subject of the broadening of the Commission's powers.

³³ OEA/Ser.L/V/II.8 Doc. 35, February 5, 1964, p. 19

³⁴ OEA/Ser.L/V/II.17 Doc. 24, September 5, 1967.

Período de Sesiones (mayo 1967) con el objeto de incorporar en el mismo la facultad de "examinar comunicaciones" que le fue otorgada por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria.³³

Entre el 3 de octubre de 1960, fecha en que la Comisión inició sus actividades, y el 4 de mayo de 1967, en que se aprobó el nuevo Reglamento, se recibieron 1525 comunicaciones, las cuales fueron tramitadas de acuerdo con el procedimiento arriba señalado. Respecto de 498 de esas comunicaciones, la Comisión solicitó las informaciones correspondientes de los Gobiernos aludidos.

A partir del Décimosexto Período de Sesiones la Comisión inició el trámite de las comunicaciones de acuerdo con el nuevo Reglamento, procedimiento al cual se hace referencia al tratar de la ampliación de las facultades de la Comisión.

3. PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

El Consejo de la Organización, dando cumplimiento a lo resuelto por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria en esta materia, dispuso en su sesión del 18 de mayo de 1966 lo siguiente:

1. Remitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para los efectos de al Resolución XXIV de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, el proyecto de Convención sobre Derechos Humanos elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en su Cuarta Reunión celebrada en 1959, juntamente con el proyecto de Convención presentado por el Gobierno de Chile, el Proyecto de Convención presentado por el Gobierno del Uruguay y las actas de los debates sobre la materia de esa Conferencia, solicitándole comunique a este Consejo, cuanto antes, su opinión con las recomendaciones que estime pertinentes.

2. Solicitar, asimismo, del señor Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenga a bien convocar a la brevedad posible a dicha Comisión a un periodo extraordinario de sesiones, si fuera necesario, para estudiar y presentar oportunamente al Consejo de la Organización el informe a que se refiere la presente resolución.

Con el objeto de facilitar a la Comisión el cumplimiento de su mandato, la Secretaría preparó un examen comparado de los tres proyectos de Convención sobre Derechos Humanos a que hace referencia la citada resolución. Para mayor conveniencia, dicho examen se publicó en tres partes, siendo la primera la que comprende todo el articulado referente a los derechos civiles y políticos³⁴. La segunda abarca los derechos económicos, sociales y culturales³⁵ y la tercera las medidas de aplicación y cláusulas especiales³⁶. Además, la Secretaría preparó, con igual fin, la compilación titulada "Documentos de la Comisión Europea de Derechos Humanos"³⁷

Previamente, durante el Décimotercer Período de Sesiones, la Comisión había resuelto, en la sesión celebrada el 27 de abril de 1966,

³³ OEA/Ser.L/V/II.17. Doc. 24, pp. 17-20.

³⁴ OEA/Ser.L/V/II.14 Doc. 7, 7 abril 1966.

³⁵ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 2, 22 junio 1966.

³⁶ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 3, 23 junio 1966.

³⁷ OEA/Ser.L/V/II.14 Doc. 8, 7 abril 1966.

3. DRAFT INTER-AMERICAN CONVENTION ON PROTECTION ON HUMAN RIGHTS

At its meeting held on May 18, 1966, the Council of the Organization, in compliance with the decision taken on the matter of a convention by the Second Special Inter-American Conference, resolved as follows:

1. To send to the Inter-American Commission on Human Rights, for the purposes of Resolution XXIV of the Second Special Inter-American Conference, the Draft Convention on Human Rights prepared by the Inter-American Council of Jurists at its Fourth Meeting, held in 1959, together with the draft convention presented by the Government of Chile, the draft Convention presented by the Government of Uruguay, and the minutes of the discussions of the aforementioned Conference on the subject, requesting that, as soon as possible, the Commission inform the Council of its opinion and make whatever recommendations it deems pertinent.

2. To request the Chairman of the Inter-American Commission on Human Rights to convoke a special session of the Commission as soon as possible, if this is necessary, in order to study the matter and to present to the Council of the Organization in due course the report referred to in this resolution.

In order to facilitate the performance of this task by the Commission, the Secretariat prepared a comparative study of the three draft conventions on human rights mentioned in the resolution. For greater convenience, the study was published in three parts, of which the first includes all the articles relating to civil and political rights;³⁴ the second deals with economic, social, and cultural rights;³⁵ and the third contains the measures of application and special clauses.³⁶ For the same purpose, the Secretariat also prepared a compilation entitled "Documents of the European Commission on Human Rights".³⁷

Earlier, during its Thirteenth Session, the Commission had made the following decisions at its meeting held on April 27, 1966:

1. To request the members of the Commission to transmit to the Secretariat, before July 31, their observations and comments on the aforesaid drafts, as well as their views on the manner in which the draft prepared by the Council of Jurists should be brought up to date and completed.

2. To request the Secretariat, on the basis of the observations and views transmitted to it by the members of the Commission, to prepare a preliminary draft of amendments to the draft convention. This preliminary draft, which should be concluded before September 30 of this year, shall be considered by the Commission at its next session.

3. To appoint a rapporteur to prepare, on the basis of the preliminary draft mentioned in paragraph 3, a corresponding statement of reasons, which the Commission shall submit to the Council of the Organization.

At the same meeting, the Commission appointed Prof. Carlos A. Dunshee de Abranches, one of its members, as rapporteur to prepare the statement of reasons.

³⁴ OEA/Ser.L/V/II.14 Doc. 7, April 7, 1966.

³⁵ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 2, June 22, 1966.

³⁶ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 3, June 23, 1966.

³⁷ OEA/Ser.L/V/II.14 Doc. 8, April 7, 1966.

2. Solicitar de las Miembros de la Comisión que transmitan a la Secretaría, antes del 31 de julio, sus observaciones y comentarios a los mencionados Proyectos, así como sus puntos de vista respecto a la forma en que el Proyecto del Consejo de Jurisconsultos debería ser actualizado y completado.

3. Solicitar de la Secretaría que, basándose en las observaciones y puntos de vista que le remitan los Miembros de la Comisión, elabore un anteproyecto de reformas al Proyecto de Convención preparado por el Consejo de Jurisconsultos. Dicho anteproyecto, que deberá estar concluido antes del 30 de septiembre del año en curso, será considerado por la Comisión en su próximo período de sesiones.

4. Designar un relator para que elabore, con base en el anteproyecto previsto en el párrafo 3, la exposición de motivos correspondiente que la Comisión deberá someter al Consejo de la Organización.

En esa misma sesión la Comisión acordó designar, como Relator de la exposición de motivos, al Prof. Carlos A. Dunshee de Abranches, Miembro de la Comisión.

Al comenzar el Décimocuarto Período de Sesiones, la Comisión consideró como uno de los temas más importantes de su Programa el estudio del Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, preparado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, y los Proyectos de los Gobiernos de Chile y Uruguay.

En primer término, la Comisión juzgó pertinente limitar su contribución al mandato que le fue conferido, es decir, a emitir su criterio u opinión para que fuese oído por el Consejo de la Organización, antes de que ese órgano procediera a introducir en el Proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos las enmiendas que juzgue necesarias para actualizarlo y completarlo.

En segundo lugar, la Comisión juzgó conveniente recomendar que se elaborara una convención con posibilidades de ser ratificada por los Gobiernos americanos, es decir, un instrumento que se limitara a la protección de los derechos humanos fundamentales y que dispusiera, en forma precisa, respecto de las medidas de aplicación.

En tercer lugar, la Comisión acordó tomar especialmente en cuenta la experiencia de los países europeos que aprobaron la Convención Europea para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, y las discusiones que tuvieron lugar durante la preparación de los Proyectos de Pactos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de la experiencia constitucional y legislativa de los países americanos.

A partir de la tercera sesión celebrada el 6 de octubre, la Comisión inició el estudio del Proyecto de Convención del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, tomando en consideración para ello las observaciones y comentarios enviados con anterioridad al período de sesiones por los Miembros de la Comisión, Prof. Manuel Bianchi, Lcda. Angela Acuña de Chacón y Prof. Durward V. Sandifer, de conformidad con la Resolución aprobada en la Reunión de México (Décimotercer Período de sesiones) así como las observaciones que oralmente presentaron los Miembros durante la discusión del proyecto y las que, por escrito, sometió el relator del tema, Prof. Carlos A. Dunshee de Abranches.

La Comisión indicó la conveniencia de alterar el título de la Convención, a los efectos de que se denominara "Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos". En cuanto al título de la Parte Primera, la Comisión expresó su preferencia por la frase "Materia de Protección"; y en cuanto al título del Capítulo I, igualmente señaló su preferencia por la frase "Sujetos de la Protección". La Comisión estimó asimismo que el articulado del proyecto del Consejo de Jurisconsultos, a partir

At its Fourteenth Session, the Commission considered as one of the most important topics on its agenda the study of the Draft Convention on Human Rights prepared by the Inter-American Council of Jurists and those prepared by the governments of Chile and Uruguay.

Initial to its frame of reference, the Commission deemed it advisable to limit its contribution to the mandate it had received, that is, to make known its views or opinion to the Council of the Organization, so that the Council could then proceed to introduce the amendments it deemed necessary to bring the draft of the Inter-American Council of Jurists up to date and complete it.

As a second consideration, the Commission decided to recommend that the Convention be prepared with a view to the possibilities of its being ratified by the American governments, that is to say, as an instrument limited to the protection of fundamental human rights and containing precise provisions with respect to measures of application.

In the third place, the Commission decided to take into special consideration the experience of the European countries that approved the European Convention on Human Rights and Basic Freedoms and the discussions held during the preparation of the draft United Nations Covenants on Human Rights, as well as the constitutional and legislative experience of the American countries.

At the third meeting, held on October 6, the Commission began its study of the Draft Convention prepared by the Inter-American Council of Jurists, taking into account for this purpose the observations and comments submitted before the start of the session by its members Prof. Manuel Bianchi, Mrs. Angela Acuña de Chacón, and Prof. Durward V. Sandifer, pursuant to the resolution approved at the Thirteenth Session held at Mexico City, as well as the observations presented orally by members during the discussion of the draft and those submitted in writing by the rapporteur, Prof. Carlos A. Dunshee de Abranches.

The Commission deemed it advisable to change the title to read "Inter-American Convention on Protection of Human Rights". With respect to the title of Part I, the Commission expressed its preference for the phrase "Protection", and for Chapter I, for the title "Subjects of Protection". The Commission also considered that a new chapter numbered II and entitled "Rights Protected" should be started with Article 2 of the draft prepared by the Inter-American Council of Jurists.

In the course of the meetings of the Fourteenth Session the Commission made a detailed examination of the first nineteen articles of the draft prepared by the Inter-American Council of Jurists, which refer to civil and political rights.

Of these nineteen articles, the Commission believed that Articles 7, 12, 13, 16, and 17 should retain their present wording. The other articles were the subject of many observations, while in regard to others, requests were made that they be replaced in whole or in part by articles drawn from the Chilean and Uruguayan drafts. In certain cases, completely new articles or clauses were proposed for insertion when it was felt that the texts under examination did not seem to offer proper protection to the rights in question.

At the close of its meetings, the Commission compiled all its observations, comments, and recommendations into the Opinion approved on October 21, 1966.³⁸ This document was transmitted to the Council of the Organization on November 4th of that year.

³⁸ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 26, October 26, 1966.

del Artículo 2, apareciera bajo el Capítulo II, cuyo título sería el de "Derechos Protegidos".

En el curso de las sesiones celebradas en el Décimocuarto Período, la Comisión examinó pormenorizadamente los primeros diecinueve artículos del proyecto del Consejo de Jurisconsultos, los cuales se refieren a los derechos civiles y políticos.

De estos diecinueve artículos la Comisión juzgó pertinente que conservaran su redacción original los Artículos 7, 12, 13, 16 y 17. El resto del articulado fue objeto de diversas observaciones, mientras que respecto de otros se juzgó necesario sugerir que fueran reemplazados, en forma total o parcial, por artículos de los proyectos de Chile y Uruguay, respectivamente. En algunos casos se recomendó la incorporación de artículos o cláusulas totalmente nuevos, cuando se estimó que los textos examinados no parecían ofrecer la protección más adecuada a los derechos en cuestión.

Al término de sus sesiones, la Comisión reunió todas sus observaciones, comentarios y recomendaciones en el Dictamen que se aprobó el 21 de octubre de 1966.³⁸ Este documento fue transmitido al Consejo de la Organización el 4 de noviembre del propio año.

La Comisión dedicó el Décimoquinto Período de Sesiones, fundamentalmente, a estudiar el resto del articulado del Proyecto del Consejo de Jurisconsultos, a partir del Artículo 20, con el que comienza el Capítulo II, Parte Primera, de dicho proyecto, que comprende los derechos económicos, sociales y culturales.

En la segunda parte del Dictamen la Comisión señaló sus dudas sobre la conveniencia de incluir en la futura Convención los llamados derechos económicos, sociales y culturales, pues estimaba "a la luz de la experiencia del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, que dichos derechos, por su naturaleza, deberán ser objeto de un régimen especial de protección internacional". Recomendó sin embargo que la futura Convención debería consagrar disposiciones en virtud de las cuales los Estados Partes reconozcan la necesidad de adoptar progresivamente en sus respectivas legislaciones, las normas que garanticen la vigencia plena de los derechos humanos. Expresó asimismo la conveniencia de iniciar la consideración del régimen de protección internacional de los llamados derechos económicos, sociales y culturales a fin de que aquellos que tuvieran aceptación generalizada pudieran ser objeto de convenciones especiales o de protocolos adicionales a la presente Convención.

La segunda parte del Dictamen fue transmitida al Consejo de la Organización el 11 de abril de 1967.³⁹

4. OTRAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Comisión, de conformidad con sus atribuciones para estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América y preparar los estudios e informes que estime convenientes en el desempeño de sus funciones (Artículo 9, acápites a) y c) del Estatuto), ha realizado las siguientes tareas:

a. Ha elaborado un Proyecto de Convención Interamericana sobre Libertad de Expresión, Información y de Investigación, el cual sometió a consideración de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria. De acuerdo con la decisión de la mencionada Conferencia este proyecto será considerado por una Conferencia Especializada Interamericana.

³⁸ OEA/Ser.L/V/II.15 Doc. 26, 26 octubre 1966.

³⁹ OEA/Ser.L/V/II.16 Doc. 8, 27 marzo 1967.

The Commission devoted its Fifteenth Session fundamentally to the study of the remaining articles of the Council of Jurists draft, beginning with Article 20, which begins Chapter II of Part I of this draft, and which concerns the economic, social, and cultural rights.

In the second part of its Opinion, the Commission expressed its doubts as to the appropriateness of including in the future Convention the rights known as economic, social, and cultural rights, since it considered that "in the light of the experience of the Council of Europe and the United Nations, those rights, because of their nature, should be covered by a special system of international protection". Nevertheless, the Commission recommended that the future Convention contain provisions by which the States Parties acknowledge the need to incorporate gradually into their domestic legislation such measures as are required to guarantee fully the exercise of human rights. It also stated the advisability of beginning consideration of the international system of protection for economic, social, and cultural rights, so that those of general acceptability could be made the object of special conventions or of additional protocols to the Convention then under study.

Part Two of the Opinion was transmitted to the Council of the Organization on April 11, 1967.³⁹

4. OTHER ACTIVITIES DIRECTED TOWARD PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

The Commission, in the fulfillment of its function to develop an awareness of human rights among the peoples of America and to prepare such studies or reports as it considers advisable in the performance of its duties, (Article 9, sections a) and c) of the Statute), has concluded the following projects:

a. It has prepared a Draft Inter-American Convention on Freedom of Expression, Information and Investigation, which it submitted to the Second Special Inter-American Conference for consideration. In accordance with the decision of that Conference, this draft is to be considered by a Special Inter-American Conference.

b. At the initiative of the Secretary-General of the Organization, it completed a full report on the situation of political refugees in America and, as a result thereof, made a recommendation to the governments of the member states to the effect that they consider the possibility of issuing a travel document to Latin-American refugees who are within their territory and who have no passports.

In the report ⁴⁰ which the Commission submitted to the Second Special Inter-American Conference, it noted the most important aspects and the most urgent needs of political refugees in America in these terms:

i) The absence of internal laws that recognize, and define clearly, the position of a political refugee from the point of view of his legal status;

ii) The absence of an inter-American convention that regulates the status of political refugees, the provisions of the Convention on Territorial Asylum of 1954 being insufficient;

iii) The absence of an agency in the inter-American system with recognized authority suitable for carrying out what has come to be called "international protection" of the political refugee;

³⁹ OEA/Ser.L/V/II.16 Doc. 8, March 27, 1967.

⁴⁰ OEA/Ser.L/V/II.11 Doc. 5 Rev., March 25, 1965.

b. A iniciativa del Secretario General de la Organización realizó un amplio estudio sobre la situación de los refugiados políticos en América y, como resultado del mismo, formuló una recomendación a los Gobiernos de los Estados miembros de la Organización en el sentido de que estudien la posibilidad de extender un documento de viaje a los refugiados latinoamericanos que se encuentren en su territorio y que carezcan de pasaporte.

En el informe ⁴⁰ que la Comisión sometió a la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria señaló los aspectos de mayor importancia y las necesidades más apremiantes de los refugiados políticos en América en los siguientes términos:

a) Ausencia de leyes internas que reconozcan y definan en forma clara la condición de refugiado político desde el punto de vista de su situación jurídica;

b) Inexistencia de una Convención Interamericana que regule la situación de los refugiados políticos, siendo insuficientes las estipulaciones de la Convención sobre Asilo Territorial de 1954;

iii) Falta de un organismo dentro del Sistema Interamericano al que se le reconozcan facultades apropiadas a efecto de llevar a cabo lo que se ha dado en llamar la "protección internacional" del refugiado;

iv) Dificultades para viajar provocadas por los problemas a los que se enfrentan los refugiados para obtener documentación apropiada (pasaportes o documentos de viaje); y

v) Problemas económicos provocados entre otras razones, por los inconvenientes a que se enfrentan los refugiados cuando pretenden obtener trabajo remunerado.

La mencionada Conferencia, tomando en consideración los puntos señalados por la Comisión, aprobó la Resolución XXI en cuyos párrafos 2 y 3 expresó lo siguiente:

2. Recomendar a los Estados miembros estudiar las posibilidades de expedir documentos de viaje en favor de los asilados que necesiten retirarse definitivamente del país de asilo, tomando como modelo las especificaciones que constan en el Artículo 28 de la Convención sobre Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra en 1951, y su anexo respectivo.

3. Encargar al Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro que prepare, oída la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un proyecto de convención sobre refugiados.

La Comisión oportunamente hizo del conocimiento del Comité Jurídico sus puntos de vista respecto al mencionado proyecto de convención. El Comité se encuentra en la actualidad preparando dicho proyecto.

c. Ha encargado a sus Miembros para que, en calidad de relatores, preparen estudios e informes sobre los siguientes temas: los derechos humanos y el derecho de sufragio en América; derechos humanos y democracia representativa; condiciones políticas, económicas y sociales de los países de América que tengan influencia sobre los derechos humanos; libertad de expresión, de información y de investigación; protección jurisdiccional de los derechos humanos; estado de sitio y derechos humanos; los derechos humanos al alcance de los niños y un estudio comparado de las comisiones europea e interamericana de derechos humanos.

d. Ha procedido a una amplia difusión de los derechos humanos. A este respecto

iv) Difficulty of travel resulting from the problems faced by refugees in obtaining proper documentation (passports or travel documents); and

v) Economic problems caused, among other things, by the difficulties faced by refugees when they seek to obtain paid work.

The aforementioned Conference, taking into consideration the points noted by the Commission, passed Resolution XXI, in Paragraphs 2 and 3 of which it expressed the following:

2. To recommend to the states that they study the possibility of issuing a travel document to refugees who must take final leave of the country where they obtained asylum, using as a sample the specifications included in Article 28 of the Convention on the Status of Refugees, signed at Geneva in 1951, and the annex thereto.

3. To charge the Inter-American Juridical Committee of Rio de Janeiro with the preparation of a draft convention on refugees, after consulting the Inter-American Commission on Human Rights.

In due course the Commission acquainted the Juridical Committee with its point of view regarding the draft convention referred to above. The Committee is at the present time at work on it.

c. The Commission has charged its Members with the preparation, in their capacity as *rapporteurs*, of studies and reports on the following subjects: human rights and the right of suffrage in the Americas; human rights and representative democracy; political, economic, and social conditions of the American countries that may influence human rights; freedom of expression, information, and investigation; legal protection of human rights; the State of Siege and human rights; human rights at the level of school children; and a comparative study of the European Commission of Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights.

d. The Commission has undertaken to spread widely an awareness of human rights. In this respect it is appropriate to note, by way of example, the series of lectures delivered by the Members of the Commission, which was carried out at Santiago, Chile, at the time of the Seventh Session. These lectures treated of the following subjects: human rights in the international order; human rights and the right of suffrage in America; the juridical protection of human rights in the field of children born out of wedlock; the protection of human rights under the writ of amparo; human rights and representative democracy; the European and Inter-American Commissions on Human Rights; and freedom of expression, information, and investigation.

e. The Commission has approved a general work program to undertake the study of important subjects, such as the right of petition, the right to education, the right to association of labor unions, the international protection of human rights since 1959, and an examination of the fundamental human rights. This program also contemplates the possibility of holding lectures and seminars on specialized subjects, as well as that of appraising the experience of international commissions of human rights and of studying the capabilities, objectives, and limitations of such bodies.

f. It has entrusted to its Secretariat the publication and distribution of a report on the relationship between the respect for human rights and effective exercise of representative democracy, which contains a reaffirmation of the basic civil and political rights.

g. It has approved the bases for the formation of National Committees of human rights by representative members who, by their high moral bearing and spirit of independence, had demonstrated an abiding adherence to the cause of the rights of the in-

⁴⁰ OEA/Ser.L/V/II.11 Doc. 5 Rev., 25 marzo 1965.

cabe señalar, por vía de ejemplo, el programa de conferencias dictadas por los Miembros de la Comisión, que se llevó a cabo en Santiago de Chile, donde se celebró su Séptimo Período de Sesiones. Dichas conferencias versaron sobre los temas siguientes: los derechos humanos en el orden internacional; los derechos humanos y el derecho de sufragio en América; protección jurídica de los derechos humanos en el campo de los hijos nacidos fuera del matrimonio; la protección de los derechos humanos a través del juicio de amparo; la protección de los derechos humanos y la democracia representativa; las comisiones europea e interamericana de derechos humanos, y la libertad de expresión, de información y de investigación.

e. Ha aprobado un programa general de trabajo que contempla el estudio de importantes temas, tales como el derecho de petición, derecho a la educación, derecho a la libertad sindical, la protección internacional de los derechos humanos desde 1959 y un examen de los derechos humanos fundamentales. Este programa contempla también la posibilidad de celebrar conferencias y seminarios sobre temas especializados, así como también para valorar la experiencia de las comisiones internacionales de derechos humanos y estudiar las posibilidades, objetivos y limitaciones de estos organismos.

f. Ha encomendado a su Secretaría la publicación y distribución de un informe sobre la relación entre el respeto de los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la democracia representativa, el cual contiene una reafirmación de los derechos civiles y políticos fundamentales.

g. Ha aprobado las bases para la constitución de Comités Nacionales de Derechos Humanos por elementos representativos que, dada su alta autoridad moral y espíritu de independencia, hubieran demostrado una constante adhesión a la causa de los derechos de la persona humana, y ha realizado las gestiones necesarias ante algunas universidades de este Continente para que ofrezcan cursos sobre derechos humanos, habiendo aprobado, para tal fin, un programa de becas en este campo.

5. AMPLIACION DE LAS FACULTADES DE LA COMISION

Desde la iniciación de sus actividades la Comisión consideró necesaria la reforma de su Estatuto en el sentido de ampliar sus facultades en cuanto a su competencia para examinar comunicaciones o reclamaciones dirigidas por cualquier persona o grupo de personas o asociaciones respecto de violaciones graves de los derechos humanos. A tal efecto acordó, en su Primer Período de Sesiones, enviar al Consejo de la Organización un proyecto de Reforma de su Estatuto.

Por su parte, la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del Este, Uruguay (enero de 1962), en su Resolución IX, recomendó al Consejo de la Organización de los Estados Americanos la reforma del Estatuto de la Comisión, a fin de ampliar y fortalecer sus atribuciones y facultades en el grado que le permitiera llevar a cabo eficazmente la promoción del respeto de los derechos humanos.

Fue la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria la que, en su Resolución XXII titulada "Ampliación de las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" modificó el Estatuto de 1960 en la forma que se describe a continuación:

a) Reiteró la competencia de la Comisión para velar por la observancia de los derechos humanos fundamentales "en cada uno de los Estados miembros de la Organización" (inciso 1).

b) Solicitó de la Comisión que "preste particular atención" a la tarea de la observancia de los derechos humanos mencionados en los Artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana (inciso 2).

dividual, and has taken the necessary steps so that universities of the American continent may offer courses on human rights, having to that end approved a program of scholarships in this field.

5. STRENGTHENING THE POWERS OF THE COMMISSION

From the beginning of its operations the Commission considered necessary the amendment of its Statute to the effect of broadening its powers respecting its competence to examine communications or claims addressed by any person or group of persons or associations regarding serious violations of human rights. To this end, it resolved, at its First Session, to send to the Council of the Organization a draft of Amendment to its Statute.

For its part, the Eighth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Relations, held in Punta del Este, Uruguay, in January, 1962, in its Resolution IX, recommended to the Council of the Organization of American States the amendment of the Commission's Statute to the end of broadening and strengthening its functions and powers to a degree that would permit it to carry out effectively the promotion of respect for human rights.

It was the Second Special Inter-American Conference that, in its Resolution XXII entitled "Expanded Functions of the Inter-American Commission on Human Rights" modified the Statute of 1960 in the form described below:

a) It reaffirmed the competence of the Commission to survey the observance of fundamental human rights "in each of the member states of the Organization" (paragraph 1).

b) It requested the Commission "to give particular attention" to the task of the observance of the human rights referred to in Articles I, II, III, IV, XVIII, XXV, and XXVI of the American Declaration (paragraph 2).

c) It authorized the Commission "to examine communications submitted to it and any other available information, to address to the government of any American State a request for information deemed pertinent by the Commission, and to make recommendations, when it deems this appropriate, with the objective of bringing about more effective observance of fundamental human rights". (paragraph 3).

d) Lastly, it requested the Commission to submit a report annually to the Inter-American Conference or Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, for the purpose of making possible an annual review, at the ministerial level, of progress and protection of human rights (paragraph 4).

Resolution XXII imposed a limitation on the representations mentioned above in providing in paragraph 5 that the Commission, in exercising the functions set forth in paragraphs 3 and 4 thereof "shall first ascertain whether the domestic legal procedures and remedies of a member state have been duly pursued and exhausted."

In its Thirteenth Session (Mexico City, April, 1966), the Commission incorporated into its Statute the new powers approved by the Second Special Inter-American Conference in the following form:

ARTICLE 9 (BIS)

The Commission shall have the following additional functions and powers:

a) To give particular attention to observance of the human rights referred to in Articles I, II, III, IV, XVIII, XXV and XXVI of the American Declaration of the Rights and Duties of Man;

c) Autorizó a la Comisión para "que examine las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier otra información disponible, para que se dirija al gobierno de cualquiera de los Estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y para que les formule recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales" (inciso 3).

d) Solicitó finalmente de la Comisión que rinda un informe anual a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores con el objeto de que puedan examinarse anualmente, al nivel ministerial, el progreso y la protección de los derechos humanos (inciso 4).

La Resolución XXII estableció una limitación a los mandatos antes mencionados al disponer, en su inciso 5, que la Comisión en el ejercicio de las atribuciones prescritas en los incisos 3 y 4, "deberá verificar, como medida previa, si los procesos y recursos internos de cada Estados miembro fueron debidamente aplicados y agotados".

La Comisión, en su Décimotercer Período de Sesiones (México, D.F., abril de 1966), incorporó a su Estatuto las nuevas facultades aprobadas por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, en la siguiente forma:

Artículo 9 (bis)

La Comisión, además, deberá:

a) Prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos mencionados en los Artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

b) Examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al Gobierno de cualquiera de los Estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales.

c) Rendir un informe anual a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el que deberá incluir: i) Una exposición sobre el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados por la Declaración Americana; ii) Una relación sobre los campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos conforme lo prescribe la citada Declaración, y iii) Las observaciones que la Comisión considere apropiadas respecto de las comunicaciones que haya recibido y sobre cualquier otra información que tenga a su alcance.

d) Verificar, como medida previa al ejercicio de las atribuciones prescritas en los incisos b) y c) del presente Artículo, si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro fueron debidamente aplicados y agotados.

Procedió, asimismo, a modificar su Reglamento a fin de ajustarlo y adaptarlo al ejercicio de las nuevas facultades previstas en su Estatuto, especialmente, en lo que respecta al examen y trámite de las comunicaciones o reclamaciones que le sean dirigidas respecto de violaciones de los derechos humanos en los países americanos. Dentro del Capítulo titulado "Comunicaciones o reclamaciones dirigidas a la Comisión", Artículos 37-58, estableció un procedimiento especial para el trámite de las comunicaciones en que se denuncie violación de cualquiera de los siguientes derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y enumerados en el acápite a) del Artículo 9 (bis) del Estatuto, a saber: el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Artículo I); el derecho de igualdad ante la ley

b) To examine communications submitted to it and any other available information; to address the government of any American State for information deemed pertinent by the Commission; and to make recommendations, when it deems this appropriate, with the objective of bringing about more effective observance of fundamental human rights;

c) To submit a report annually to the Inter-American Conference or to the Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, which should include: (i) a statement of progress achieved in realization of the goals set forth in the American Declaration; (ii) a statement of areas in which further steps are needed to give effect to the human rights set forth in the American Declaration; and (iii) such observations as the Commission may deem appropriate on matters covered in the communications submitted to it and in other information available to the Commission.

d) To verify, as a condition precedent, the exercise of the powers set forth in paragraphs b) and c) of the present article, whether the internal legal procedures and remedies of each member state have been duly applied and exhausted.

The Commission likewise went on to modify its Regulations in order to conform and adapt them to the exercise of the new powers provided in its Statute, especially wherein it concerns the examination and processing of communications or claims addressed to it respecting violations of human rights in the American countries. In the Chapter entitled "Communications or Claims Addressed to the Commission", Articles 37-58, it established a special procedure for the handling of the communications charging the violation of any of these following human rights sanctioned by the American Declaration of the Rights and Duties of Man and enumerated in section a) of Article 9 (bis) of the Statute, i.e., the right to life, liberty, and personal security (Article I); the right to equality before the law (Article II); the right to religious freedom and worship (Article III); the right to freedom of investigation, opinion, expression and dissemination (Article IV); the right to a fair trial (Article XVIII); the right to protection from arbitrary arrest (Article XXV); and the right to due process of law (Article XXVI).

Besides incorporating the provisions for mere negotiation that were contemplated in the Regulations of 1960, the procedure referred to above included the following rules:

1. The Commission must verify, as a condition precedent, whether the internal legal procedures and remedies of each member state have been duly applied and exhausted.

2. There is established a period of limitations for the presentation of denunciations of six months following the date on which, as the case may be, the final domestic decision has been handed down or the signer of the communication has become aware that his recourse to domestic remedy has arbitrarily been hindered or the final domestic decision has been unjustly delayed.

3. There is established a period of 180 days following the date on which the denunciation has been transmitted to the Government concerned in request of information, within which the government itself may furnish the pertinent information. This period of time has as its object, in cases in which the Government fails to furnish the information requested, the raising of a rebuttable presumption of the truth of the facts alleged. At the same time, the Commission may make an extension to the term of 180 days in cases in which it finds it justified.

4. If the occurrence of the violation is confirmed, the Commission shall prepare

(Artículo II); el derecho de libertad religiosa y de culto (Artículo III); el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento (Artículo IV); el derecho de justicia (Artículo XVIII); el derecho de protección contra la detención arbitraria (Artículo XXV) y el derecho a proceso regular (Artículo XXVI).

Dicho procedimiento, además de recoger las disposiciones de mero trámite contempladas en el Reglamento de 1960, incluyó las siguientes normas:

1. La Comisión, como medida previa, debe verificar si los procesos o recursos internos de cada Estado miembro fueron debidamente aplicados y agotados.

2. Establece un plazo perentorio de seis meses para la presentación de la denuncia desde la fecha en que, según el caso, se haya dictado la decisión interna definitiva o cuando el signatario haya tenido conocimiento de que se haya impedido arbitrariamente el ejercicio de los recursos de jurisdicción interna o se haya retardado la decisión interna definitiva.

3. Establece un plazo de ciento ochenta días desde la fecha en que la denuncia se ha transmitido al Gobierno interesado, en solicitud de información, para que el propio gobierno suministre la información pertinente. Este plazo tiene por objeto determinar, en caso de que el Gobierno no suministre la información solicitada, la presunción de la veracidad de los hechos alegados. Sin embargo, la Comisión puede prorrogar dicho plazo en los casos en que se encuentre justificado.

4. Comprobada la violación, la Comisión prepara el informe del caso con las recomendaciones procedentes al Gobierno interesado.

5. Si el Gobierno interesado no adopta dentro de un plazo razonable las medidas recomendadas, la Comisión puede formular las observaciones que estime apropiadas en el informe anual que presente a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

6. Si la Conferencia o la Reunión de Consulta no formula observaciones a la Comisión y en caso de que el gobierno aludido no hubiere aún adoptado las medidas recomendadas, la Comisión puede publicar su informe.

La Comisión acordó aplicar también este procedimiento a las comunicaciones en las que se denuncien represalias en contra de los signatarios de comunicaciones dirigidas a la Comisión o en contra de quienes hayan figurado como perjudicados en tales comunicaciones.

A partir de mayo de 1967 de Comisión aplicó este nuevo procedimiento a las cuarenta y cuatro reclamaciones recibidas desde esa fecha y acordó transmitir diecinueve de ellas a los Gobiernos aludidos solicitándoles la información correspondiente.

a report on the case and make appropriate recommendations to the Government concerned.

5. If the Government concerned does not, within a reasonable time, adopt the measures recommended by the Commission, the latter may make the observations it considers appropriate in the annual report it is to present to the Inter-American Conference or to the Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs.

6. If the Inter-American Conference or the Meeting of Consultation does not make any observations on the Commission's recommendations and if the Government referred to has not yet adopted the measures recommended, the Commission may publish its report.

The Commission agreed to apply this procedure also to communications charging the taking of reprisals against signers of communications addressed to the Commission or against any persons mentioned as injured parties in such communications.

Beginning in May, 1967, the Commission applied this new procedure to the forty-four complaints received since that date and decided to transmit nineteen of them to the Governments concerned requesting the relevant information.